



Ubicación 1962
Condenado BLANCA EDILMA CORREA GIRALDO
C.C # 38288042

CONSTANCIA TRASLADO REPOSICIÓN

A partir de hoy 30 de Agosto de 2023, quedan las diligencias en secretaria a disposición de quien interpuso recurso de reposición contra la providencia 1228 del 26/07/2023, RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA AUTO INTERLOCUTORIO 1228 DE FECHA 26/07/2023 - NIEGA -LIBERTAD CONDICIONAL por el término de dos (2) días de conformidad a lo dispuesto en el Art. 189 inciso 2° del C.P.P. Vence el día 31 de Agosto de 2023.

Vencido el término del traslado, SI ☒ NO ☐ se presentó sustentación del recurso.

EL SECRETARIO(A)


ANA KARINA RAMIREZ VALDERRAMA

Ubicación 1962
Condenado BLANCA EDILMA CORREA GIRALDO
C.C # 38288042

CONSTANCIA TRASLADO REPOSICIÓN

A partir de hoy 1 de Septiembre de 2023, quedan las diligencias en secretaria a disposición de los demás sujetos procesales por por el término de dos (2) días de conformidad a lo dispuesto en el Art. 189 inciso 2° del C.P.P. Vence el 4 de Septiembre de 2023.

Vencido el término del traslado, SI ☐ NO ☐ se presentó escrito.

EL SECRETARIO(A)


ANA KARINA RAMIREZ VALDERRAMA



Ejecución de Sentencia : 1962
No. Único de Radicación : 11001-60-00-000-2016-00231-00
Condenado: : BLANCA EDILMA CORREA GIRALDO
Cédula: 38288042
Fallador : JUZGADO 14 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ
Delito (s) : CONCIERTO PARA DELINQUIR, TRÁFICO, FABRICACIÓN Y PORTE DE ESTUPEFACIENTES
Sitio de Reclusión : CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BOGOTÁ
Decisión: : AUTO NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL

JUZGADO DIECIOCHO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Julio veintiséis (26) de dos mil veintitrés (2023)

Auto Interlocutorio No. 1228

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Procede el Despacho a emitir pronunciamiento en torno a la libertad condicional de **BLANCA EDILMA CORREA GIRALDO**, conforme la solicitud elevada por esta y los documentos remitidos por la **CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BOGOTÁ**.

ANTECEDENTE PROCESALES

En sentencia proferida el 30 de agosto de 2016 por el Juzgado 14 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, fue condenada **BLANCA EDILMA CORREA GIRALDO** como coautor responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en concurso heterogéneo de concierto para delinquir, a la pena principal de ciento diez (110) meses de prisión, multa de mil ochocientos cincuenta (1850) SLMLV y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de la privación de la libertad. Dentro de la misma sentencia condenatoria, le fue negado el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, así como el sustituto de la prisión domiciliaria.

El H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en providencia del 23 de enero de 2017 resolvió confirmar en su integridad la sentencia proferida en primera instancia.

Los hechos por los que fue condenada la sentenciada **BLANCA EDILMA CORREA GIRALDO** datan del 9 de marzo de 2015.

BLANCA EDILMA CORREA GIRALDO se encuentra privada de la libertad por cuenta de la presente actuación desde el **13 de mayo de 2017**¹

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL DESPACHO

La libertad condicional se rige por lo normado en el artículo 30 de la Ley 1709 del 2014, el cual establece:

¹ Fecha en la que se suscribió el oficio No. 129-CPAMSMBOG en el cual se dejó a disposición a la sentenciada por parte de la Asesoría Jurídica del Establecimiento Penitenciario.



Artículo 30. Modifícase el artículo 64 de la Ley 599 de 2000 el cual quedará así:

Artículo 64. Libertad condicional. El juez, previa valoración de la conducta punible, concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos:

1. Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena.
2. Que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena.
3. Que demuestre arraigo familiar y social.

Corresponde al juez competente para conceder la libertad condicional establecer, con todos los elementos de prueba allegados a la actuación, la existencia o inexistencia del arraigo. En todo caso su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia del condenado. (El subrayado y negrillas es nuestro).

El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario.

El artículo 471 de la Ley 906 de 2004., por su parte, señala:

“El condenado que se hallare en las circunstancias previstas en el Código Penal, podrá solicitar al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, la libertad condicional acompañada de resolución favorable del consejo de disciplina, o en su defecto del director del respectivo establecimiento carcelario, copia de la cartilla biográfica y demás documentos que prueben los requisitos exigidos en el Código Penal, los que deberán ser entregados a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes”.

En esas condiciones, se entra a verificar los requisitos que debe reunir el condenado para que se conceda el subrogado de la libertad condicional:

1.- Previa valoración de la conducta punible.

Respecto de la valoración de la conducta punible, encuentra el Despacho necesario traer a colación lo manifestado por la Corte Constitucional en sentencia C-757 de 2014 en la que declaró exequible la expresión “previa valoración de la conducta punible” contenida en el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, y sobre el punto precisó:

*“Declarar **EXEQUIBLE** la expresión “previa valoración de la conducta punible” contenida en el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, en el entendido de que las valoraciones de la conducta punible hechas por los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad para decidir sobre //la libertad condicional de los condenados tengan en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean éstas favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional”.*

En la parte motiva de su fallo la Corte expuso:

“Sin embargo, sí se vulnera el principio de legalidad como elemento del debido proceso en materia penal, cuando el legislador establece que los jueces de ejecución de penas deben valorar la conducta punible para decidir sobre la libertad condicional



sin darles los parámetros para ello. Por lo tanto, una norma que exige que los jueces de ejecución de penas valoren la conducta punible de las personas condenadas a penas privativas de su libertad para decidir acerca de su libertad condicional es exequible, siempre y cuando la valoración tenga en cuenta todas las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean éstas favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional”.

El criterio jurisprudencial citado fue ratificado por la mencionada corporación, mediante sentencia T-640/17 del 17 de octubre de 2017, en que señalo:

*Lo relevante de este asunto es que la Corte reiteró la importancia constitucional que tienen la resocialización de las personas condenadas y la finalidad preventiva especial de la pena. **Por ello, indicó que el juez de ejecución de penas si bien puede tener en cuenta la conducta punible, la personalidad y antecedentes de todo orden para efectos de evaluar el proceso de readaptación social del condenado en procura de proteger a la sociedad de nuevas conductas delictivas, en todo caso, debe valorar la conducta punible teniendo en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria**, sean estas favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional de los condenados.*

Más adelante manifestó:

*Entendió, entonces, la Corporación que resulta razonable interpretar la nueva redacción como una ampliación del ámbito de la valoración que le corresponde llevar a cabo al juez competente para la concesión de la libertad condicional, según la cual ya no le corresponde a este solo valorar la gravedad de la conducta punible, **sino que le concierne valorar todos los demás elementos, aspectos y dimensiones de dicha conducta, además de las circunstancias y consideraciones favorables al otorgamiento de la libertad condicional, realizadas por el juez penal que impuso la condena**.*

Este requisito de carácter subjetivo, el cual es obligatorio, implica realizar un estudio previo de la valoración de la conducta punible, atendiendo las circunstancias, elementos y consideraciones efectuados por el juzgado fallador en la sentencia.

Es así que, el juicio que se impone derivado de la valoración de las condiciones particulares de **BLANCA EDILMA CORREA GIRALDO**, no tiene finalidad distinta que determinar la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario, no solamente a partir de su comportamiento al interior del centro de reclusión, sino previa valoración de la conducta punible y teniendo en cuenta *todos los demás elementos, aspectos y dimensiones* de la misma, en los términos indicados, según lo preceptúa el citado artículo 30 antes transcrito.

Así las cosas, el Juzgado debe entrar a realizar un juicio de proporcionalidad con el fin de determinar si en el presente caso, debe darse la oportunidad al sentenciado de acceder a la libertad condicional, dada la demostrada finalidad rehabilitadora de la pena o, por el contrario, si por la gravedad de la conducta punible debe continuar privado de la libertad, tal como lo estableció la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 12 de julio de 2022, Magistrado Ponente Fernando León Bolaños Palacios;

“Sin embargo, como ya indicó, el análisis de la modalidad de las conductas no puede agotarse en su gravedad y tampoco se erige en el único factor para determinar la concesión o no del beneficio punitivo, pues ello contraría el principio de dignidad humana que irradia todo el ordenamiento penal, dado el carácter antropocéntrico que orienta el Estado Social de Derecho adoptado por Colombia en



la Constitución Política de 1991; y al mismo tiempo desvirtuaría toda función del tratamiento penitenciario orientado a la resocialización.

La anterior es una de las maneras más razonables de interpretar lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-757 de 2014 (declaró exequible la expresión: «previa valoración de la conducta» del artículo 64 del Código Penal), en el sentido que al analizar la procedencia de la libertad condicional el Juez de Ejecución de Penas deberá: «establecer la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario a partir del comportamiento carcelario del condenado.»

Es así como el examen de la conducta por la que se emitió condena debe ponderarse con el fin de prevención especial y el de readaptación a la sociedad por parte del sentenciado, pues no de otra forma se cumple con el fin primordial establecido para la sanción privativa de la libertad, que no es otro distinto a la recuperación y reinserción del infractor, tal como lo estipulan los artículos 6° numeral 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10° numeral 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, integrados a nuestro ordenamiento interno por virtud del Bloque de Constitucionalidad (Artículo 93 de la Constitución Nacional).

30.3 Corolario de ello, un juicio de ponderación para determinar la necesidad de continuar con la ejecución de la sanción privativa de la libertad, debe asignarle un peso importante al proceso de readaptación y resocialización del interno, sobre aspectos como la escueta gravedad de la conducta (analizada en forma individual); pues si así no fuera, la retribución justa podría traducirse en decisiones semejantes a una respuesta de venganza colectiva, que en nada contribuyen con la reconstrucción del tejido social y anulan la dignidad del ser humano.

Así ha sido reconocido internacionalmente, entre otros en las «Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos»⁴⁰, que estableció como principio rector aplicable al proceso de los condenados, la necesidad de que «[e]n el tratamiento no se deberá recalcar el hecho de la exclusión de los reclusos de la sociedad, sino, por el contrario, el hecho de que continúan formando parte de ella. Con ese fin debe recurrirse, en lo posible, a la cooperación de organismos de la comunidad que ayuden al personal del establecimiento en su tarea de rehabilitación social de los reclusos...»

Motivo por el que, en el mismo cuerpo normativo, respecto al tratamiento penitenciario se consignó, debe tener por objeto «inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad.»

30.4 Bajo ese entendido, la prisión debe entenderse como parte de un proceso que busca, no solamente los aspectos draconianos de las sanciones penales; entre ellos, que el conglomerado se comporte normativamente (prevención general); y que, tras recibir la retribución justa, el condenado no vuelva a delinquir (prevención especial); aunado a tales aspectos, las penas, en especial las restrictivas de la libertad, también se deben encaminar a que el condenado se prepare para la reinserción social, fin este que conlleva necesariamente a que el tratamiento penitenciario y el comportamiento del condenado durante este, sea valorado, analizado, estudiado y tenga consecuencias en la manera en que se ejecuta la sanción.

Lo anterior, justamente con el fin de incentivar en el infractor, esperanza y motivos para participar en su proceso de reinserción, asegurar la progresividad del tratamiento penitenciario, así como para brindar herramientas útiles al penado que le permitan prepararse para retornar a la vida en sociedad cuando recobre la libertad.”



Reiterado por la Corte Suprema en decisión del 27 de julio de 2022, por Magistrado Ponente Fabio Espitia Garzón dentro del CUI 11 001 60 00000 2017 00972 03:

"6.7.2 Del tratamiento penitenciario"

Como quiera que la procedencia de la libertad condicional no se agota con la sola gravedad de la conducta y tampoco es el único factor para tener en cuenta para ese efecto, han de valorarse las funciones de la pena que operan en la fase de ejecución, esto es, la prevención especial y la reinserción social, señaladas en el artículo 4º de la Ley 599 de 2000.

La gravedad de la conducta debe armonizarse con otros factores, según se expuso, como el comportamiento del procesado en prisión y todos aquellos que permitan determinar si se justifica la continuación de la ejecución de la pena privativa de la libertad."

En el presente caso, si bien a favor del sentenciado concurrieron circunstancias que se han de tener en cuenta en la ponderación de la necesidad de continuar con la privación de la libertad, y es la aceptación de cargos a la cual se sometió, contribuyendo a una pronta y eficaz administración de justicia, también es cierto que el juez de conocimiento de primera instancia, así como el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta Ciudad, calificaron y valoraron la conducta descrita en la sentencia condenatoria como grave, en relación con los hechos, así como las circunstancias modales en las que se produjo, señalando para el efecto lo siguiente:

"... En varios barrios de la localidad de Bosa de esta ciudad a manos de sujetos dedicados conjuntamente a la venta, conservación y comercialización de sustancias estupefacientes proporcionando datos de alias de presuntas personas que conformaban la organización, algunas direcciones y un abonado celular..."

... Se colige de los anteriores elementos materiales probatorios de convicción, la materialidad de las conductas punibles que se tejen recíprocamente en una unidad de tiempo, modo y lugar de despliegue, esto es, los punibles de concierto para delinquir, con el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y la concurrencia para uno de los implicados en la injerencia del punible de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, evidencias que fueron puestas en conocimiento del estrado y de los intervinientes en la presente audiencia de verificación de allanamiento... De tal manera emerge de las mismas la responsabilidad de los implicados, dado que sostenían un vínculo de consenso en la forma y calidad que cada uno ostentaba dentro del grupo, ya sea como jefe, administrador o expendedor su objeto perfilaba en comercializar, almacenar y vender sustancias estupefacientes en sitios estratégicos en donde se acercaban las personas adquirir o aprovisionarse de las mismas, recibiendo el beneficio monetario que representaba la actividad ilícita.

Ahora bien, en cuanto a la imputación personal o culpabilidad, no existen pruebas legales y oportunamente allegadas al proceso, que permitan concluir que los infractores, no pudieron conocer, comprender y auto determinarse por la norma penal, siendo entonces imputables, esto es los implicados tuvieron la capacidad intelectual de dimensionar que con la conducta desplegada trasgredían los preceptos legales y afectaban bienes jurídicos protegido de la seguridad y salud pública que colocaron en alto riesgo de vulneración de manera reprochable, en el sector donde desplegaban su campo de acción de manera desprevénida. (...)²

² Sentencia condenatoria, acápite "Consideraciones del despacho" páginas 5 a 17.



En ese orden de ideas, es claro que los Juzgados falladores consideraron como grave la conducta punible desplegada por la sentenciada, aspecto desfavorable para el otorgamiento del subrogado penal conforme la última jurisprudencia citada.

De esta manera resulta indiscutible que se exteriorizó con la comisión del delito el desconocimiento sin justificación alguna de la norma penal, así como el irrespeto e irreverencia con los bienes jurídicos afectados, toda vez que las conductas punibles desplegadas por la penada y sus compañeros de causa, generan un estado de alerta e inquietud entre la sociedad, aunado a lo anterior, es un comportamiento que ha afectado en especial a la población adolescente y joven que conforman una comunidad, y que pese a los múltiples esfuerzos que se han llevado a cabo para erradicar dicha problemática, han sido infructuosos, dado el desplegar de acciones como las que adelantó **BLANCA EDILMA CORREA GIRALDO**, no logrando dejar de lado, tratándose de la ejecución de la pena de prisión, las funciones de ésta relativas a la prevención general y a la retribución justa.

Por otro lado, este Juzgado considera que no es que con el aislamiento del delincuente se borren los efectos nocivos del delito, pero es indudable que la comunidad percibe un sentimiento de justicia y seguridad al ver aislado de su entorno a quien violó flagrantemente y sin vacilación uno de los bienes jurídicos que más se ha propendido proteger como lo son la salud pública y la seguridad pública, razones por las que el tratamiento intramural no solo tiende a resocializar al condenado, sino que también está dirigido a proteger a la sociedad; así que entre el *ius puniendi* del estado y la libertad del delincuente, media la seguridad, por lo que se debe analizar si esta resultaría seriamente amenazada al dejarlo en libertad.

Por último, la conducta punible constituye un juicio de valor dirigido a construir el pronóstico de readaptación social, máxime cuando el fin de la ejecución de la pena no solamente apunta a una readecuación del comportamiento del individuo para su vida futura en sociedad, sino también a proteger a la comunidad de hechos atentatorios contra bienes jurídicos, dentro del marco de la prevención especial y general, de manera tal que, en cuanto mayor sea la gravedad del delito y la intensidad del grado de culpabilidad, sin menospreciar por supuesto la función resocializadora del tratamiento penitenciario como garantía de la dignidad humana, el Estado no puede obviar las necesidades preventivas generales para la preservación del mínimo social.

2.- Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena.

La sentenciada **BLANCA EDILMA CORREA GIRALDO**, se encuentra privada de la libertad por cuenta de la presente actuación desde el 13 de mayo de 2022, data en que fue puesta a disposición por parte del establecimiento penitenciario, es decir, que a la fecha ha descontado de la sanción impuesta **catorce (14) meses y trece (13) días**.

Por concepto de redención de pena, le han sido reconocidos los siguientes lapsos:

REDENCIONES		
FECHA AUTO	MESES	DIAS
2 de noviembre de 2022		10
30 de mayo de 2023		23
TOTAL	1 mes y 3 días	



Aunado a lo anterior, en proveído del 8 de mayo de 2023 este Juzgado conforme la documentación remitida resolvió reconocer dentro de este proceso un total de **setenta y un (71) meses y cinco (5) días**, de privación de la libertad.³

Sumados los periodos de privación de la libertad y las redenciones antes señaladas, se tiene que **BLANCA EDILMA CORREA GIRALDO**, a la fecha ha cumplido **ochenta y seis (86) meses y veintiún (21) días**, de la pena impuesta, tiempo superior a las 3/5 partes de la condena que para el caso corresponden a **sesenta y seis (66) meses**, por lo que se cumple con el requisito de carácter objetivo.

3.- Que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena.

Obra dentro de las diligencias documentación allegada por el establecimiento carcelario, a saber, resolución favorable No. 1030 de 28 de junio de 2023 y cartilla biográfica.

Se extrae que durante el tiempo que ha permanecido privada de la libertad **BLANCA EDILMA CORREA GIRALDO**, ha mantenido una calificación de su conducta como "ejemplar", y de igual forma que no ha sido destinataria de sanciones disciplinarias desde la fecha en que se encuentra privada de la libertad por estas diligencias.

También da cuenta el expediente, que, durante su actual reclusión en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá, la penada desarrollo al interior del penal actividades de estudio "*Inducción al tratamiento progresivo*" y de trabajo "*Recuperador ambiental paso inicial*", las que repercuten directamente en la función resocializadora de la pena y que han incidido en la redención de una parte de la condena que le fue impuesta, actividades que han sido calificadas como sobresalientes.

Por lo anteriormente expuesto y como se advirtió en precedencia, una vez aplicado el test de proporcionalidad como método para adoptar la decisión correspondiente, debe decirse que continúa prevaleciendo la valoración de la conducta punible como quiera que el Juez de Conocimiento, y el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en sus respectivas sentencias, han calificado la conducta de la condenada de manera grave, quien en el caso que nos atañe, en compañía de otras personas se dedicó al tráfico de estupefacientes en sectores donde reside población vulnerable, generando así que tanto la seguridad, como los demás aspectos que permiten que una sociedad pueda convivir, se vieran directamente afectados, pese a tener conocimiento de que el desarrollo de dicha actividad contrariaba múltiples preceptos legales.

Aunado a lo anterior, se ha de mencionar que el accionar desplegado por la penada, era la lograr que los estupefacientes que eran manejados por la banda criminal de la cual, hacia parte, se distribuyeran a lo largo de determinados territorios, orquestando diversos planes y fraguando múltiples modalidades para lograr tal cometido, así como quedo consignado en la sentencia condenatoria, donde se recopilaron diversos elementos probatorios que dan fe, de lo anteriormente expuesto.

³ Por el lapso que permaneció privada de la libertad dentro del proceso radicado No. 05001-60-00-000-2016-00554-00, en el cual el 8 de junio de 2016 el Juzgado 5º Penal del Circuito con Función de Conocimiento Especializado de Antioquia precluyó la investigación seguida en contra de la penada.



En esa medida encuentra el Despacho que, sin desconocer que en la penada ha desarrollado un ejemplar comportamiento durante su vida en reclusión, lo cierto, es que resulta necesario que, por el momento, la penada continúe cumpliendo la pena en el establecimiento penitenciario, puesto que conceder el subrogado penal en estas condiciones enviaría un mensaje negativo a la comunidad, por lo que **BLANCA EDILMA CORREA GIRALDO** deberá seguir con el proceso de resocialización para continuar preparando su paso a la vida en sociedad para la satisfacción de los fines de la pena, por lo que no se accederá a la concesión de la libertad condicional, en tanto que tiene mayor relevancia la valoración negativa de la conducta punible por el real daño al que se sometió a la sociedad.

Por lo expuesto, **el Juzgado Dieciocho de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D. C.,**

RESUELVE:

PRIMERO. - Negar la libertad condicional a **BLANCA EDILMA CORREA GIRALDO**, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO. - Remítase copia de la presente decisión a la Oficina Jurídica de la **CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BOGOTÁ**, para que obre en la hoja de vida del interno.

Contra esta decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,


FLOR MARGARITA LEÓN CASTILLO
JUEZ

	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS BOGOTÁ	
NOTIFICACIONES	
FECHA: 22-08-23	HORA: _____
NOMBRE: Blanca Correa Giraldo	
CÉDULA: 38288042	
NOMBRE DE FUNCIONARIO QUE NOTIFICA	
Recibo: copia	

Notificación - Autos del Juzgado 18 EPMS

Secretaria 3 Centro De Servicios Epms - Seccional Bogotá
<cs03ejcpbt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 25/08/2023 4:39 PM

Para:Tannya Vanessa Bernal Leon <tbernall@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cordial saludo.

se remite correo que antecede para lo de su cargo.

Gracias



Secretaría 3 - Centro de Servicios
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D. C.

De: Jorge E. Castillo Vega <jecastillov@gmail.com>
Enviado: viernes, 25 de agosto de 2023 8:00 a. m.
Para: Tannya Vanessa Bernal Leon <tbernall@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretaria 3 Centro De Servicios Epms - Seccional Bogotá <cs03ejcpbt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Notificación - Autos del Juzgado 18 EPMS

Cordial saludo. A través de la presente acuso la recepción de los correos electrónicos mediante los cuales me fue enviada copia de los autos seguidamente relacionados, respecto de los cuales, me doy por notificado el día de hoy.

RADICADO	PROCESADO	FECHA
29954	Edgar Mauricio Osorio Rodríguez	15/06/2023
42930	Albertino Acevedo Daza	16/06/2023
42930	Albertino Acevedo Daza	16/06/2023
42930	Albertino Acevedo Daza	16/06/2023
42930	Albertino Acevedo Daza	16/06/2023
33002	Óscar Andrés Sánchez Cruz	31/07/2023
33002	Óscar Andrés Sánchez Cruz	31/07/2023
4849	Juan Camilo Vélez Gómez	8/08/2023
4849	Juan Camilo Vélez Gómez	8/08/2023
30696	Víctor Alfonso Martínez Moreno	8/08/2023
30696	Víctor Alfonso Martínez Moreno	8/08/2023
20501	Roberto Méndez Delgadillo	8/08/2023
70642	John Fredy Medina Chaparro	8/08/2023
13086	Víctor Manuel Ballesteros Cajamarca	22/06/2023
23740	Luz Marina Martínez Cardona	12/06/2023
24580	Juan Carlos Carabalí Ortiz	15/06/2023
24746	Marisol Mejía Ramírez	12/06/2023
25068	Yesica Lorena Carvajal León	15/06/2023
47635	Holman Ómar Castillo Acosta	10/08/2023
22268	Jeisson Alexánder Mora Roberto	10/08/2023
22268	Jeisson Alexánder Mora Roberto	10/08/2023

13479	Fredy Alexánder Villa Meneses	11/08/2023
62137	Carlos Alberto Rico Castrillón	14/08/2023
62137	Carlos Alberto Rico Castrillón	14/08/2023
70633	Michael Steven Barbosa Aranza	14/08/2023
49457	Sergio Andrés Moreno Gama	16/06/2023
61823	Hernando Ospina Rugeles	14/08/2023
13625	Luz Marina Gómez	30/06/2023
119832	Cristhian Johany Muñoz Trujillo	27/07/2023
34683	Marlon Brándon Espino Hernández	30/06/2023
34683	Marlon Brándon Espino Hernández	30/06/2023
49457	Sergio Andrés Moreno Gama	15/08/2023
49457	Sergio Andrés Moreno Gama	15/08/2023
31533	Sandra Milena Rodríguez Niño	13/06/2023
33655	Jesús María Flórez Gutiérrez	12/06/2023
36891	Armando Duque Sierra	13/06/2023
92968	Miller Esteban Varela Ayala	14/06/2023
49103	Juan Fernando Melo Torres	11/07/2023
43672	Edwin Albeiro Ruiz Herrera	12/07/2023
27105	Angie Carolina Nova Forero	13/06/2023
15930	Yuli Esperanza Navarro Romero	16/06/2023
15930	Yuli Esperanza Navarro Romero	16/06/2023
15930	Yuli Esperanza Navarro Romero	3/08/2023
16494	Jefferson Gualteros Núñez	15/06/2023
16494	Jefferson Gualteros Núñez	15/06/2023
4784	Julio Yovanny Córdoba Beltrán	12/06/2023
4784	Héctor Hely Córdoba Alvarado	12/06/2023
4784	Julio Yovanny Córdoba Beltrán	12/06/2023
3193	Maryory Olmos Rojas	25/04/2023
3193	Maryory Olmos Rojas	25/04/2023
22268	Jeisson Alexánder Mora Roberto	16/08/2023
49457	Sergio Andrés Moreno Gama	16/08/2023
49457	Sergio Andrés Moreno Gama	16/08/2023
59703	Cristian Camilo González	16/08/2023
70642	John Fredy Medina Chaparro	16/08/2023
4667	Álvaro Oviedo Zamudio	23/06/2023
41694	Hernán Barrero Vidal	15/08/2023
41694	Hernán Barrero Vidal	15/08/2023
1962	Blanca Edilma Correa Giraldo	26/07/2023
1962	Blanca Edilma Correa Giraldo	26/07/2023
1962	Blanca Edilma Correa Giraldo	18/08/2023
60091	Ronald Fabián Daza Carmona	17/08/2023
45319	María Fernanda Vidal Genes	14/08/2023
2078	Nuver Vela Ducuara	22/08/2023
2078	Nuver Vela Ducuara	22/08/2023
8534	José Octavio Ortiz Ardila	12/06/2023
33589	María Isabel Vidal Aristizábal	11/07/2023
13781	Carlos Evelio Caicedo	22/06/2023
13781	Carlos Evelio Caicedo	22/06/2023
13781	Carlos Evelio Caicedo	22/06/2023
26265	Jonathan Stiven Álvarez Yepes	15/06/2023
37012	Fabián Garzón Beltrán	14/06/2023
37012	Fabián Garzón Beltrán	14/06/2023
38695	Paula Andrea Quiroga Cañón	13/06/2023

46322	Jeferson Alonso Lugo	12/06/2023
38312	Jh. Alexander Buitrago Ángel	25/07/2023
33589	María Isabel Vidal Aristizábal	23/08/2023
115549	Wilson Eliécer Ramos Pérez	22/06/2023
115549	Wilson Eliécer Ramos Pérez	22/06/2023
121768	Brayan Nicolás Murcia Garzón	12/07/2023
121768	Brayan Nicolás Murcia Garzón	12/07/2023
2078	Nuver Vela Ducuara	23/08/2023
7361	Mery Andrea Plata	23/08/2023
7361	Mery Andrea Plata	23/08/2023
54184	Julián Humberto Buitrago Zapata	23/08/2023
27105	Angie Carolina Nova Forero	23/08/2023
4232	Jesús David Castro Palacio	23/08/2023
55656	Rosa Ysabel García López	23/08/2023

Atentamente,

Jorge E. Castillo Vega
Procurador 369 JIP

URGENTE - 1962 - J18 - DS3 - JLCM - RECURSO: NOTIFICACION AUTO INTERLOCUTORIO NO 1228 DEL NI 1962

Ventanilla 2 Centro Servicios Juzgado Ejecucion Penas Medidas Seguridad - Bogotá - Bogotá D.C. <ventanilla2csjepmsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 24/08/2023 5:34 PM

Para:Secretaria 3 Centro De Servicios Epms - Seccional Bogotá <cs03ejcpbt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

📎 2 archivos adjuntos (511 KB)

RECURSO DE REPOSICION YO EN SUBSIDIO DE APELACION.pdf; Correo_ Ventanilla 2 Centro Servicios Juzgado Ejecucion Penas Medidas Seguridad - Bogotá - Bogotá D.C. - Outlook.pdf;

De: Edison Prieto <ep3416@gmail.com>

Enviado: jueves, 24 de agosto de 2023 4:58 p. m.

Para: Tannya Vanessa Bernal Leon <tbernall@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Ventanilla 2 Centro Servicios Juzgado Ejecucion Penas Medidas Seguridad - Bogotá - Bogotá D.C. <ventanilla2csjepmsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Re: NOTIFICACION AUTO INTERLOCUTORIO NO 1228 DEL NI 1962

CORDIAL SALUDO

ME PERMITO ALLEGAR RECURSO DE REPOSICIÓN Y/O EN SUBSIDIO DE APELACIÓN EN FAVOR DE BLANCA EDILMA CORREA GIRALDO QUE LE FUE NEGADA LA LIBERTAD CONDICIONAL.

atentamente,

Edisson Prieto
abogado
cel: 3178831734

El mar, 22 ago 2023 a las 12:08, Tannya Vanessa Bernal Leon (<tbernall@cendoj.ramajudicial.gov.co>) escribió:

FAVOR CONFIRMAR LECTURA.

Para los fines legales correspondientes me permito remitir auto interlocutorio de 26 DE JULIO DE 2023, con el fin de notificar la providencia en archivo adjunto.

Para efectos de validez de la notificación solicito su amable colaboración, en el sentido de remitir oportunamente la confirmación de lectura.

Sin otro particular y para los fines legales a que haya lugar.

FAVOR ACUSAR RECIBIDO Y/O CONFIRMACIÓN DE LECTURA

CUALQUIER PETICIÓN ENVIARLA AL CORREO: ventanilla2csjepmsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co



Tannya Bernal León
Escribiente

Centro de Servicios Administrativos
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá

AVISO DE
CONFIDENCIALIDA
D: Este correo
electrónico
contiene

información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus

documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

--

Saludos,

Att. Edison Prieto Villarreal

Abogado

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

URGENTE-1962-J18-ARCHIVO GESTION- MCRR-RV: Envío recurso de reposición subsidio de apelación frente auto donde niega el subrogado de la libertad condicional de la señora Blanca Edilma Correa Giraldo CC 38.288.042

Ventanilla 2 Centro Servicios Juzgado Ejecucion Penas Medidas Seguridad - Bogotá - Bogotá D.C. <ventanilla2csjepmsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 28/08/2023 3:22 PM

Para:Secretaria 3 Centro De Servicios Epms - Seccional Bogotá <cs03ejcpbt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (4 MB)

recurso de apelación blanca edilma correa.pdf;

De: Juzgado 18 Ejecución Penas Medidas Seguridad - Bogotá - Bogotá D.C.

<ejcp18bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: lunes, 28 de agosto de 2023 3:04 p. m.

Para: Ventanilla 2 Centro Servicios Juzgado Ejecucion Penas Medidas Seguridad - Bogotá - Bogotá D.C.

<ventanilla2csjepmsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Envío recurso de reposición subsidio de apelación frente auto donde niega el subrogado de la libertad condicional de la señora Blanca Edilma Correa Giraldo CC 38.288.042

Juzgado 18 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá

ejcp18bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Calle 11 No. 9 A – 24

Tel. 2864524

logo

De: maria paula gomez guzman <lolita_440@hotmail.com>

Enviado: lunes, 28 de agosto de 2023 3:03 p. m.

Para: Juzgado 18 Ejecución Penas Medidas Seguridad - Bogotá - Bogotá D.C.

<ejcp18bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Ventanilla 2 Centro Servicios Juzgado Ejecucion Penas Medidas Seguridad - Bogotá - Bogotá D.C. <ventanilla2csjepmsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Envío recurso de reposición subsidio de apelación frente auto donde niega el subrogado de la libertad condicional de la señora Blanca Edilma Correa Giraldo CC 38.288.042

Cordial saludo se envía correo electrónico recurso de reposición subsidio de apelación frente auto donde niega el subrogado de la libertad condicional de la señora Blanca Edilma Correa Giraldo CC 38.288.042

Quedando atento a cualquier requerimiento.

Obtener [Outlook para Android](#)

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

Re: NOTIFICACION AUTO INTERLOCUTORIO NO 1228 DEL NI 1962

Edisson Prieto <ep3416@gmail.com>

Jue 24/08/2023 4:58 PM

Para:Tannya Vanessa Bernal Leon <tbernall@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC:Ventanilla 2 Centro Servicios Juzgado Ejecucion Penas Medidas Seguridad - Bogotá - Bogotá D.C.
<ventanilla2csjepmsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co> 1 archivos adjuntos (262 KB)

RECURSO DE REPOSICION YO EN SUBSIDIO DE APELACION.pdf;

CORDIAL SALUDO

ME PERMITO ALLEGAR RECURSO DE REPOSICIÓN Y/O EN SUBSIDIO DE APELACIÓN EN FAVOR DE BLANCA EDILMA CORREA GIRALDO QUE LE FUE NEGADA LA LIBERTAD CONDICIONAL.

atentamente,

Edisson Prieto
abogado
cel: 3178831734El mar, 22 ago 2023 a las 12:08, Tannya Vanessa Bernal Leon (<tbernall@cendoj.ramajudicial.gov.co>) escribió:**FAVOR CONFIRMAR LECTURA.**

Para los fines legales correspondientes me permito remitir auto interlocutorio de 26 DE JULIO DE 2023, con el fin de notificar la providencia en archivo adjunto.

Para efectos de validez de la notificación solicito su amable colaboración, en el sentido de remitir oportunamente la confirmación de lectura.

Sin otro particular y para los fines legales a que haya lugar.

FAVOR ACUSAR RECIBIDO Y/O CONFIRMACIÓN DE LECTURA**CUALQUIER PETICIÓN ENVIARLA AL CORREO: ventanilla2csjepmsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co****Tannya Bernal León**

Escribiente

Centro de Servicios Administrativos
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotáinformación de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el
destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo deAVISO DE
CONFIDENCIALIDA
D: Este correo
electrónico
contiene

inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

--

Saludos,

Att. Edisson Prieto Villarreal

Abogado

Bogotá DC, Octubre 13 de 2022

Señores:

JUZGADO DIECIOCHO (18) DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ

ATT: DOCTORA FLOR MARGARITA LEON CASTILLO

RAD: 11001-60-00-000-2016-00231-00

NUMERO INTERNO

DELITO: TRAFICO FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES EN CONCURSO HETEROGENEO DE CONCIERTO PARA DELINQUIR.

CONDENADA: BLANCA EDILMA CORREA GIRALDO. IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA N 38.288.042

RECURSO DE REPOSICIÓN SUBSIDIADO DE APELACIÓN FRENTE AUTO N 1228 DONDE NIEGA EL SUBROGADO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL.

Yo Blanca Edilma Correa Giraldo mayor de edad e identificada con cédula N 24.719.309 cómo aparece al pie de mi firma actuando en nombre propio me permito solicitar se sirva disponer la conducente a efectos que se conceda el recurso de reposición subsidiado de apelación frente el auto donde se niega el subrogado de la libertad condicional artículo 64 del código penal 1709 de 2014 y ley 906 de 2004 artículos 365 numeral 2 de la ley 600 de 2000 sentencia C-194 de 2005, C 757 de 2014 MP Gloria Stella Ortiz Delgado y tutelas STP 15806, Y 107644 de noviembre de 2019 Magistrada ponente Patricia Salazar Cuéllar. CSJ AP 2977 2022 Radicado 61471 Magistrado Ponente Doctor Fernando León Bolaños Palacios, y AP 3348 de 2022 del 27 de julio de 2021 MP Fabio Ospitia Garzón potente Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

PETICIÓN

Solicitar a su señoría se revoque la decisión en auto de fecha 26 de julio de 2023 notificado en fecha de agosto 22 de 2023 el cual negó el otorgamiento del sustituto de la libertad condicional basado en los presupuestos de carácter subjetivo en cuanto no estuvo a su favor la valoración de la conducta punible realizada por el fallador, adicional el despacho que sin desconocer que la penada ha desarrollado un ejemplar comportamiento durante su vida en reclusión conceder el beneficio del subrogado de la libertad condicional sería enviar un mensaje negativo a la comunidad, y en tanto que tiene mayor relevancia la valoración negativa de la conducta punible, Ahora bien frente a la valoración de la conducta en criterio del despacho el actuar delictivo desplegado por la aquí condenada resultó grave y merecía un severo juicio de reproche pues la condenada hacia parte de una organización dedicada al microtráfico de estupefacientes en varios barrios de la localidad de Bosa. Sin embargo su Señoría no tuvo en cuenta las nuevas jurisprudencias otorgadas por la Corte Suprema de Justicia estudie de nuevo el otorgamiento de conceder el sustituto de libertad condicional, CSJ 2977 2022 Radicado 61471 Magistrado Ponente Doctor Fernando León Bolaños Palacios y AP 3348 de 2022 del 27 de julio de 2021 MP Fabio Ospitia Garzón potente Sala de Casación

Penal de la Corte Suprema sentencia C -194 de 2005 y tutelas STP 15806, Y 107644 de noviembre de 2019 Magistrada ponente Patricia Salazar Cuéllar.

La suscrita eleva ante su digno despacho por ser quién ejecuta mi pena que es la norma aplicable al caso en concreto establece que tendrán derecho a la libertad como mecanismo sustituto de la pena privativa de la libertad aquellos condenados que hallan cumplido las tres 3/5 partes de la pena, previa valoración de la conducta punible, siempre y cuando su buen comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión, al juez superior fundamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena, previa reparación a la víctima y demuestre su arraigo familiar y social, el tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como período de prueba Cuando esté sea inferior a 3 años el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario.

HECHOS

1 La suscrita fue condenada a la pena principal de 110 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir y tráfico fabricación o porte de estupefacientes condena que fue emitida por el Juzgado catorce penal del circuito de Bogotá.

2 La suscrita se encuentra privada de la libertad desde el día 13 de Mayo de 2017 hasta la fecha llevando 87 meses 21 días entre físicos y redención.

3 Por ser quién ejecuta mi pena elevó ante su señoría con fundamento en le artículo 64 del código penal ley 1709 de 2014 y ley 906 de 2004 artículos 365 numeral 2 de la ley 600 de 2000 y sentencias actuales CSJ 2977 2022 Radicado 61471 Magistrado Ponente Doctor Fernando León Bolaños Palacios y AP 3348 de 2022 del 27 de julio de 2021 MP Fabio Ospitia Garzón potente Sala de Casación Penal de la Corte Suprema Sentencia C-194 de 2005 y tutelas STP 15806, T 107644 de noviembre de 2019 Magistrada ponente Patricia Salazar Cuéllar, se revoque y en su defecto se conceda el beneficio del subrogado de libertad condicional.

La cual fundamento en las siguientes consideraciones las mismas que reitero:

- Cumpro con todos los requisitos previstos consistente en haber cumplido las tres quintas (3/5) partes de la condena.
- En cuanto a los requisitos subjetivos relacionados con el adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en la cárcel de mujeres que permite fundamentar mediante concepto favorable llevando un comportamiento catalogado como ejemplar he realizado diferentes estudios tales como inicie programas y representante del comité de derechos humanos mi dedicación adicional diferentes cursos misión carácter, cadena de vida, biblioteca y curso de confecciones tejidos de lana las cuales han construido al fortalecimiento y valores así como demostraron mi arraigo familiar y social En todo caso su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que demuestre insolvencia económica del condenado.

4 Como quiera que en el artículo 64 del código penal actualmente establece que tendrá derecho al beneficio de libertad condicional el condenado que halla cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena en definitiva impuesta a la sentenciada en el presente caso de 110 meses de prisión, se

establece que debe cumplir un termino de 68 meses sumando a lo anterior entre físico y redención llevando un total de 87 meses 21 días.

5 En relación con el factor subjetivo, esto es la valoración de la conducta punible, cuyo análisis se circunscribe a lo señalado por el fallador, a la luz de los nuevos pronunciamientos de la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia preciso: “Esta Corporación respecto de la libertad condicional determinó que el imperativo para el funcionario judicial concederla a quién cumpla la totalidad de las exigencias que contiene el precepto siendo indispensable adicionalmente que previamente se valore la conducta punible para luego arribar el análisis de los requisitos señalados en el canon 64 citado” AP8301-2016 radicado 49278.

La valoración de la conducta punible la honorable corte constitucional señaló:

“Así los jueces competentes para decidir acerca de una solicitud de libertad condicional deben interpretar y aplicar el inciso 1 del artículo 30 de la ley 1709 de 2014 tal como fue condicionado en la Sentencia C 757 del 2014, esto es, bajo entendido de qué la valoración que realice de la conducta punible tenga en cuenta las circunstancias elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria sean estos favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional.

Entonces una vez haya valorado la conducta punible a continuación verificara el cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena (ii) que es un adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permitan suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena en establecimiento penitenciario y carcelario y (III) que demuestre arraigo familiar y social”

Pues bien aplicados dichos criterios jurisprudenciales a fin de efectuar análisis respectivos y determinar si procede en ese asunto el otorgamiento de la libertad condicional para la pena prima facie habrá de precisarse que las conductas punibles por las cuales está cumple la condena impuesta, recuérdese concierto para delinquir agravado en concurso con tráfico fabricación o porte estupefacientes merecen un severo juicio de reproche social y jurídico como lo merece toda conducta punible tal como se consigno en el auto recurrido.

No obstante los hechos allí descritos, ha de considerarse el criterio último de la Sala de Casación Penal de la H. corte Suprema de Justicia según el cual la modalidad o gravedad de la conducta punible no puede tenerse como única motivación o factor para negar la concesión de la libertad condicional. Auto AP2977 de 12 de julio de 2022 dentro del radicado N 61471 M.P Dr. Fernando León Bolaños Palacios.

En tal sentido, la alta Corporación señaló que:

“... la finalidad de la prevención contenida en el artículo 64 del código penal con sus respectivas modificaciones No es otra que relevar al condenado del cumplimiento de una porción de la condena que le hubiere sido impuesta cuando el concreto examen del tiempo que ha permanecido privado de la libertad de sus características individuales y la comprobación objetiva de su comportamiento en prisión o en su residencia permite concluir que en su caso resulta innecesario continuar con la ejecución de la sanción”

Y agregó:

“... ha de entenderse qué tal examen (otorgamiento de la libertad condicional) debe afrontarse declara la necesidad de cumplir una sanción impuesta, por lo que no se trata de un mero o aislado examen de la gravedad de la conducta, sino de un estudio de la personalidad actual y los antecedentes de todo orden del sentenciado,

También precisó que:

“...el análisis de la modalidad de las conductas no puede agotarse en su gravedad y tampoco se erige en el único factor para determinar la concesión o no del beneficio punitivo, pues ello contraría el principio de dignidad humana que irradia todo el ordenamiento penal, dado en el carácter antropocéntrico que orienta el Estado Social de Derecho adoptado por Colombia en la Constitución política de 1991; al mismo tiempo desvirtuar y a toda función del tratamiento penitenciario orientado a la resocialización”

Y concluyó el máximo Tribunal de la Jurisprudencia Penal: “ Es así el examen de la conducta por la que se emitió condena debe ponderarse con el fin de prevención especial y el de readaptación a la sociedad por parte del sentenciado no de otra forma se cumple con el fin primordial establecido para la sanción privativa de la libertad que no es otro distinto a la recuperación y reinserción del infractor....”

En virtud del criterio jurisprudencial es transcrito entonces de conformidad con los certificados de calificación de conducta de la sentenciada y cartilla biográfica llegada por el centro carcelario dónde se encuentra recluso ahora es sacarse que su comportamiento desde su ingreso al penal cuenta de la presente actuación ha sido calificada en grados bueno y ejemplar asimismo se resulta que durante el tiempo en reclusión la pre nombrada interna a cumplir actividades laborales de estudio que le han merecido reconocimiento de redención de pena además en privación de la libertad intramuros Correa Giraldo no fue sancionado disciplinariamente.

De otro lado a tenerse en cuenta la Resolución expedida por el Consejo Disciplina de la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad Mujeres de Bogotá “El buen pastor”, mediante la cual emite concepto favorable para el otorgamiento de la libertad condicional apenada Blanca Edilma Correa Giraldo.

Pues bien de lo anteriormente expuesto teniendo en cuenta que la procesada demostró su arraigo familiar y social y como quiera que la valoración de la conducta no puede ser la única causa para negar la libertad condicional de acuerdo a los nuevos pronunciamientos jurisprudenciales se colige que en privación de la libertad intramuros de la condenada Correa Giraldo **ha observado un proceso positivo de resocialización tratamiento penitenciario readaptación y readecuación de su comportamiento** asumiendo una gran conducta acorde con lo exigido dando con ella muestras del cumplimiento a las normas legales y asumir pautas de comportamiento regularmente aceptadas y al sopesar todo ello con la modalidad y gravedad de las conductas punibles por las que fue condenada surge fundadamente que no existe necesidad de que la pena continúe cumpliendo en privación efectiva de la libertad lo que le reste de la conducta impuesta y, por el contrario, de otorgarle la oportunidad de que le muestre a la judicatura y a la sociedad que en su caso el tratamiento penitenciario a producir resultados positivos.

Dentro de unos hechos constitutivos que infrinjan los derechos de la comunidad el estado representado por el ente investigador en su etapa previa y por los jueces es un juzgamiento no llevan a la punibilidad dentro de un proceso penal que finaliza con una absolución o condena de un individuo si es esta última se impone o suspende una pena privativa de la libertad.

En este ciclo privativo el condenado puede hacer uso de subrogados o mecanismos sustitutivos como la libertad condicional contemplando el artículo 64 del Código Penal. Está configurada la oportunidad de que la persona que está condenada y se encuentra privada de la libertad intramural o domiciliariamente puede cesar dicho estado interpuesto sentencia condenatoria para su concesión, el juez, a quien le corresponde por competencia estudiar a los requisitos que exige la norma entre los que se encuentran previamente la valoración de la conducta, declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-757 de 2014.

Esta valoración inicio en la adición concebida por el legislador como gravedad de la conducta en la ley 890 de 2004 y la Corte Constitucional declaró exequibilidad Sentencia C-194 2005, en el que señaló que el juez de ejecución no puede apartarse del contenido de la sentencia condenatoria al momento de la evaluación de la procedencia subrogado penal. Allí dejó que el juez no quedaba autorizado para valorar dicha "gravedad". Ya que lo que la norma señalaban era que se debería tener en cuenta de parte del funcionario era la gravedad del comportamiento punible calificado y valorado previamente en la sentencia condenatoria por el juez de conocimiento como criterio para conceder el subrogado penal"

Con modificación incorporada por el artículo 30 de la ley 1709 de 2014 el legislador condicionó la concesión del beneficio la libertad condicional a la " **previa valoración de la conducta punible**" suprimiendo la palabra "gravedad" de la disposición anterior de lo que se ha derivado una diversidad de interpretaciones por parte de los jueces vigilantes.

Lo anterior con base en lo expresado por la Corte Constitucional en Sentencia C 757 de 2014 en donde termina una vez más que las valoraciones de la conducta punible hechos por los jueces de ejecución de penas para decidir sobre el beneficio de la libertad condicional debe tenerse en cuenta las circunstancias elementos consideraciones hechas por el juez falla en la sentencia ya fueron favorables o desfavorables.

Ello significa que el Juez de Ejecución de Penas podrá valorar la conducta de conformidad con el artículo 64 del código penal en la medida en que sobre tal aspecto se haya pronunciado el juzgado fallador o en su defecto la segunda instancia. Del mismo modo indica lo anterior que la redacción del mencionado artículo 64 del Código Penal.. "no establece elementos de conducta punible deben tener en cuenta los jueces de ejecución de penas ni establece los parámetros a seguir para asumir las valoraciones de ella hicieron previamente los jueces penales" CSJ T 107644(19-11-19).

En efecto, el juez ejecutor se somete a las consideraciones expuestas por el juez que resolvió la situación jurídica del procesado a través de su fallo condenatorio.

Así lo manifestó la H. Corte Suprema de Justicia:

"respecto a la valoración de la conducta punible la corte constitucional sentencia CC 757 del 2014, teniendo como referencia la Sentencia CC C-194-2005, primer lugar cuál es la función del juez de ejecución de penas y acuerdo a está la valoración de la conducta punible que debía realizar.

“ El juez de ejecución de penas no realizarían una valoración ex novo de la conducta punible. Por el contrario el fundamento de su decisión en cada caso sería la valoración de la conducta punible hecha previamente por el juez penal” CSJ T 119389 (30-09-21).

Teniendo en cuenta antes mencionado y analizando los pronunciamientos de la Honorable Corte con Constitucional se tiene que cuando se va analizar la conducta por parte de los Jueces de Ejecución de Penas, en cualquiera de sus dos interpretaciones la de la ley 890 de 2004 “gravedad” en la modificación de la ley 1709 del 2014 “ conducta”, declaradas exequible en las sentencias arriba relacionadas C-195-04 y C-757-14, la conclusión dada por el máximo Tribunal constitucional fue la siguiente:

“En los mismos términos, cuando la norma acusada dice que la libertad condicional podrá concederse previa valoración de la gravedad de la conducta no significa qué el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad qué es autorizado para valorar la gravedad de la conducta. Lo que la norma indica qué dicho funcionario deberá tener en cuenta la gravedad del comportamiento punible calificado y valorado previamente en la sentencia condenatoria por el juez de conocimiento como criterio para conceder el subrogado penal. Corte constitucional sentencia C-194 de 2005.

Efectivamente conforme a lo expuesto y dado el análisis e interpretación dada sobre dicho pronunciamiento, no se puede someter nuevamente al condenado con el estudio hecho por el juez fallador en el momento en qué dosifico las conductas penales, esto es mi por la censura ni con la “misma óptica en qué se produjo la condena”. Tampoco puede apartarse del contenido de la sentencia condenatoria al momento de dicha evaluación, pero no queda autorizado para valorar la gravedad de la conducta, lo que se debe tener en cuenta parte del funcionario es la gravedad del comportamiento punible calificado y valorado previamente la sentencia por el juez de conocimiento como criterio para conceder el subrogado penal.

Ello significa que el juez vigilante debe someterse No la valoración que hizo el de conocimiento en el momento de la dosificación de la pena qué es su motivación para “dosificar” la conducta, o conductas endilgadas al imputado, sino al pronunciamiento en los mecanismos sustitutivos de la pena cuando se pasa la audiencia del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal.

Y bebé de ser así porque si el funcionario que vigila la pena se sometiera a lo consignado por el juez de conocimiento al momento el que dosifica las conductas, estaríamos frente a un eventual negativa de las solicitudes de los de los mecanismos sustitutivos solicitados sobre todo el de la libertad condicional.

Se entiende qué en el instante de evaluar la posible libertad del implicado debe hacerse desde la óptica de los puestos por el payador al momento en que se pronuncia qué es obligatorio en la suspensión de la ejecución de la pena y prisión domiciliaria artículo 63 y 38 del código penal audiencia está indispensable para que se logra a través de los condenados acceder a cualquiera de estos postulados y si el fallador ve que de acuerdo a la situación fáctica se tenga que pronunciar sobre la gravedad de conducta así lo hará momento este en que el Juez de Ejecución se basa para estudiar la posibilidad de conceder o negar en mecanismos sustitutivos solicitado.

Cómo se señaló han existido varias interpretaciones al respecto no solo de parte de la Corte Constitucional sino de la Corte Suprema de Justicia que marcan un criterio y lineamiento para analizar y estudiar y decidir sobre este tópico.

En una decisión del Alto Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria "C.S.J Ras 44195 (03-09-14), se analiza la gravedad de la conducta y la conducta punible basado en el pronunciamiento que se hizo por parte del fallador en el momento procesal de cuantificación de las penas, una pena en el que se hizo un reproche sobre la conducta del implicado, no ocurriendo lo mismo en el momento en que se pronunció antes los mecanismos sustitutivos de la pena.

...VIII DE LAS PENAS:

VIII.4. lo anterior sobre la base de considerar qué la gravedad de la conducta juzgada superó modo importante su tope básico necesaria para configurar el delito en tanto significó cooptación de por lo menos un escaño del poder legislativo por grupos al margen de la ley, con menoscabo de los valores que nutre un Estado democrático: el daño fue significativo porque se fundió en unas mismas personas las condiciones de agentes de grupos ilegales y del estado la seguridad pública sufrió grave deterioro amén su legitimidad; la intensidad del dolor se verificó mayor, dado que inició con la coalición político paramilitar que condujo a sus elecciones en el Congreso de la República y se extendió durante el ejército alternado del cargo cada uno por un año aunada la necesidad de pena a propósito de sus finalidades, de prevención general y especial, inserción social, protección y justa retribución.

VIII.5. se tiene en cuenta que aunque la concertación con pretensiones políticas del señor(..) con un grupo armado al margen de la ley tuvo las connotaciones antes referenciadas que motivan el incremento a las penas no se tiene conocimiento de qué es de la función legislativa en su corto tiempo de ejercicio el haya propiciado acciones concretas que redundarán selectivamente en beneficio de estos colectivos criminales lo que de algún modo y forma un reitera miento en el componente lesivo del delito tanto que el testimonio del propio (..) por momentos asumió el carácter de reclamo perspectiva aunada.

La carencia antecedentes penales desaconseja superiores a las determinadas por eso no se le impone el máximo permitido en la ley.

IX DE LA LIBERTAD:

No hay a lugar a la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni a su sustitución por la prisión domiciliaria impedirlo un requisito objetivo en el primer caso porque la ley solo autoriza el subrogado frente a la imposición de una pena de prisión no superior a 3 años y en el segundo porque solo es viable la consideración de una sustitución cuando la pena mínima privativa de la ley para un delito objeto de la condena sea de 5 años o menos acorde con lo establecido en los artículos 63 y 38 del código penal presupuesto que no sé satisface.

Posterior en los fallos dela corte constitucional C-233-16, T-640-17 y C-265-17 determinó qué se debe tener en cuenta para los jueces de ejecución de penas que la finalidad constitucional de la pena no está en el castigo el condenado si no es su resocialización como la garantía que nos brinda el artículo 5 de la ley 65 de 1993 dignidad humana. Esto nos lleva a velar por la reinserción social apoyada por la educación que se les brinda en los Centros Carcelarios a los penados en forma

intramural o domiciliaria con el fin de humanizar la pena como lo señala el artículo primero de la Constitución Nacional.

Mismo modo la Honorable Corte Suprema de Justicia establecido que el juez de ejecución de penas debe tener en cuenta la participación del condenado las diferentes actividades de readaptación y resocialización dentro de los centros carcelarios y buscar la reinserción del que ha cometido un error y lo esta subsanando.

En reciente exposición en sede de tutela de parte del mismo órgano de cierre, hace un recuento sobre la amplitud de posibilidades hermenéuticas con respecto a la valoración de la conducta punible y el guiarse de los principios constitucionales y el bloque de constitucionalidad cómo bien lo es el principio pro homine también denominado cláusula de favorabilidad en la interpretación de los derechos humanos centrándose en lo más favorable al hombre y sus derechos fundamentales consagrados en la Carta Política.

En dicha providencia advierte que C.S.J RAD T -107644(19-11-19) M.P Patricia Salazar Cuellar:

- i) No se puede tenerse como razón suficiente para negar la libertad condicional la alusión a la lesividad de la conducta punible frente a los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal pues ellos solo es compatible con prohibiciones expresas frente a ciertos delitos como sucede con el artículo 68a del Código Penal.
En ese sentido la valoración no puede hacerse tampoco, con base en criterios morales para determinar la gravedad del delito, pues explicación de las distintas pautas que informan las decisiones de los jueces no puede hallarse en las diferentes visiones de los valores morales sino los principios constitucionales
- ii) La alusión al bien jurídico afectado es solo una de las facetas de la conducta punible cómo también lo son las circunstancias de mayor y menor punibilidad los agravantes y los atenuantes entre otras por lo que el juez de ejecución de penas debe valorar por igual todas y cada una de estas;
- iii) Contemplada la conducta punible El su integridad según lo declarado por el juez que profiere la sentencia condenatoria este es solo uno de los distintos factores que debe tener en cuenta el juez de ejecución de penas para decidir sobre la libertad condicional pues este dato debe armonizarse con el comportamiento al procesado en prisión y los demás elementos útiles que permiten analizar la necesidad de continuar con la ejecución de la pena privativa de la libertad como lo bien lo es por ejemplo la participación del condenado las actividades programadas en la estrategia de redacción social en el proceso de resocialización.
por tanto lazo la alusión a una de las facetas de la conducta punible esto es en el caso concreto solo al bien jurídico no puede detenerse bajo ninguna circunstancia como motivación suficiente para negar la concesión del subrogado penal.
Esto por supuesto no significa que el juez de ejecución de penas no puede referirse a la lesividad de la conducta punible para valorar la sino que no puede quedarse allí Debe por el contrario realizar el análisis completo.
IV) el cumplimiento de esta carga motivacional también es importante para garantizar la igualdad y la seguridad jurídica pues supone la evaluación de cada situación en detalle

y justifica en cada caso el tratamiento diferenciado al que puede llegar el juez de ejecución de penas para cada condenado...”

Este precedente ha sido reiterado en sentencias con radicados 111560(28-07-20),113578(01-12-20);115313(23-03-21);119257(28-09-21) y 119389(30-09-21) y en la providencia con radicado 59888(15-09-21).

Así lo señaló en el Rad 119389:

“Tal postura fue ratificada recientemente en proveído CSJ AP4142-2021, 15 SEP 2021, rad 59888, en los siguientes términos:

(..) Tal cómo lo ha indicado está Corporación la concepción de la libertad condicional depende del cumplimiento de todos los requisitos enlistados en el precepto transcrito pues en su examen el juez no puede prescindir de ninguno de las condiciones fijadas por el legislador incluida la valoración de la conducta cuyo análisis preliminar. CSJ AP8301-2016 Rad. 49278. CSJ AP5297-2019.

En línea con dicha interpretación, está Corporación ha sostenido que:

“la mencionada expresión la – valoración de la conducta – prevista en el inciso 1 del artículo 30 de la ley 1709 de 2014 va más allá del análisis de la gravedad extendiéndose aspectos relacionados con la misma sin que el juez ejecutor de la pena tenga facultad para soslayar su evaluación cómo lo señaló la Corte Constitucional en Sentencia C 757 del 15 octubre de 2014.

Así es claro que para la concesión de la libertad condicional resulta imperioso que el juez valora la conducta por la cual se emitió la condena no obstante insiste **tal examen de la frontal sé de la necesidad de cumplir una sanción ya impuesta por lo que no se trata de un mero y aislado examen de la gravedad de la conducta sino de un estudio de la personalidad Y los antecedentes de orden del sentenciado para de esta forma evaluar su proceso de readaptación social.** Por lo que la apreciación de esos factores deben conjugarse el impacto social que genera la comisión del delito bajo la égida de los fines de la pena los cuales para estos efectos son complementarios no excluyentes CSJ AHP5065-2021 Y CSJ T-119389.

Ahora complementando lo anterior en recientes pronunciamientos sobre este punto la Honorable Corte Suprema de Justicia concreto los siguiente:

“6.6.2.3 Por último obligado resulta traer a colación el auto de segunda instancia CSJ AP2977-2022 12 Jul 2022 Rad 61471, no solo por su cercano procedimiento sino por identificarse con la temática bajo examen razón por la cual su trascendencia alcance irradia al asunto que concita presente decisión en el mencionado proferido así se discurrio:

“el análisis de la modalidad de las conductas no puede agotarse su gravedad y tampoco se erige en el único factor para determinar la concepción o no del beneficio punitivo pues ello contraría el principio del que irradia todo el ordenamiento penal dado el carácter antropocéntrico que orienta el Estado Social de Derecho adoptado por Colombia en la Constitución Política de 1991 y al mismo tiempo desvirtuar y a toda función del tratamiento penitenciario orientado a la resocialización.

Lo anterior es una de las maneras más razonables de interpretar lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-757 2014 (declaró exequible la expresión “previa valoración de la

conducta" del artículo 64 del Código Penal), en el sentido que al analizar la procedencia La libertad condicional El juez de ejecución de penas deberá:

"Restablecer la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario a partir del comportamiento carcelario del condenado"

Es así cómo el examen de la conducta por la que se emitió condena debe ponderar sé con el fin depresión especial y el de readaptación a la sociedad por parte del sentenciado pues no de otra forma se cumple con el fin primordial establecido para la sanción privativa de la libertad que no es otro distinto de la recuperación y reinserción del infractor tal como lo estipula en los artículos 6º numeral 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y décimo numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos e integrados a nuestro ordenamiento interno por virtud del bloque constitucionalidad artículo 93 de la Constitución Nacional.

30.3 Corolario de ello, el juicio de ponderación para determinar la necesidad de continuar con la ejecución de la sanción privativa de la libertad debe asignarle un peso importante al proceso de readaptación y resocialización del interno sobre aspectos como la escueta gravedad la conducta analizar en forma individual pues sí así no fuera la retribución justa podría traducirse en decisiones semejantes a una respuesta de venganza colectiva qué nads contribuyen con la reconstrucción del tejido social y anulas la dignidad del ser humano.(...)

30.4 Bajo ese entendido, la prisión debe entenderse como parte de un proceso que busca no solamente los aspectos draconianos en las sanciones penales entre ellos que el conglomerado se comporte normativamente prevención general y que tras recibir la retribución justa El condenado no vuelva a delinquir prevención especial ahumado a tales aspectos las penas, en especial las restrictivas de la libertad también se deben encaminar a que El condenado se prepare para la reinserción social este que conlleva necesariamente a que el tratamiento penitenciario el comportamiento El condenado Durante este se ha valorado analizado estudiado y tenga consecuencias en la manera en que se ejecuta la sanción.

Anterior justamente con el fin de incentivar en el infractor esperanza y motivos para participar en su proceso de reinserción asegurar la progresividad del tratamiento penitenciario así como para brindar herramientas útiles al peinado que le permiten prepararse para retomar a la vida el sociedad cuando recobre la libertad.

30.5 solo secretos entenderlo de otra manera sería tanto como establecer una prohibición generalizada que no ha sido prevista por el legislador para todos aquellos eventos en los que la conducta se evidencia objetivamente grave (..)

30.6 en ese orden de ideas entender que la gravedad objetiva de la conducta es sinónimo de negación de la libertad condicional equivaldría a extender los efectos de una prohibición normativa específica sobre todos los casos que se estimen de notoria gravedad sin haber sido así previsto en la ley ita la expansión no es compatible con los derechos fundamentales de los condenados pues los dejarías sin la expectativa de que su repentino interés de cambio sean factores a valorar durante el tratamiento penitenciario erradicando los incentivos y con ello el interés en la resocialización pues lo único que quedaría es el cumplimiento total de la pena al interior de un establecimiento carcelario.

6.6.2.4 a las anteriores consideraciones que su integridad se ratifica solo es dable agregar lo siguiente:

Toda conducta punible es considerada contra la sociedad al punto que le he dado reprime su comisión a través de la punición. De cualquier manera, a raíz del resquebrajamiento de las relaciones humanas ella afecta los valores que condicionan la existencia conservación y desarrollo de la vida en comunidad. En últimas además del daño privado el delito siempre ocasiona un daño público directamente relacionado con la transgresión de las normas establecidas por el legislador penal necesarias para la convivencia pacífica.

La condición de grave o leve de acción delictiva de lugar a intensos inacabados debates. Nadie ha de negarse que existen cierto tipo de comportamientos que por su naturaleza o por lo menos desde una perspectiva simplemente objetiva implican una mayor afectación a valores sensibles para el conglomerado social verbigracia los vinculados a bienes jurídicos que tutelan la vida la integridad personal la libertad en todas sus aristas o la administración pública, para citar solo algunos lo que de contera genera unánime rechazo social sin embargo ello no soluciona la problemática la hora y calificar el injusto.

La praxis judicial enseña qué en torno a la valoración de la conducta punible se elaboran múltiples reflexiones para justificar su gravedad todas válidas si se quiere una por cada tipo penal que el Estatuto Punitivo contempla pero en el fondo solo confluyen en un argumento circular que asume por punto de partida la razones que tuvo en cuenta el legislador para considerar que terminó proceder debía ser objeto de represión por el Estado.

La previa valoración del injusto típico introducen a la discusión argumentos de índole subjetivo que no contribuyen a superar la ambigüedad generada por el legislador de 2014 en el artículo 64 del Código Penal.

Importa acotar qué la sala por obvias razones no se refiere aquellas conductas que el propio legislador en uso de su libertad de configuración normativa excluyó del subrogado de la libertad condicional asunto que ocupó la atención de la Corte Constitucional Sentencia CC C 073 2010 en la cual se estudio la constitucionalidad del artículo 26 de la ley 1121 de 2006 por la cual se dictan normas para la prevención detección investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones.

Por ello preciso que legislador puede establecer merced a un amplio margen de configuración sobre los cuales delitos permite qué tipo de beneficios penales y sobre cuáles no dentro de esos criterios los más importantes son el análisis de la gravedad del delito y la naturaleza propia del diseño de las políticas criminales cuyo sentido incluye razones políticas de las cuales no puede apropiarse el juez constitucional.

Sustentar la negación del otorgamiento de la libertad condicional en la sola alusión a la gravedad o lesividad de la conducta punible solo es posible frente a casos en los cuales el legislador ha prohibido el otorgamiento del subrogada por dicho motivo cómo sucede con los previstos en los artículos 26 dela ley 1121 y 199 de la ley 1098 de 2006 pues como se dijo en la decisión CSJ STP15806-2019 19 nov 2019, Rad 107644, atrás citada, “no puede tenerse como razón suficiente para negar la libertad condicional la alusión a la lesividad de la conducta punible frente a los bienes jurídicos protegidos por el derecho penal pues ellos solo es compatible con prohibiciones expresas a ciertos delitos”

La perspectiva en clave de libertad principalmente apuesta por las posibilidades de resocialización y reinserción social de la persona que ha cometido una infracción delictiva acorde a máximas de rehabilitación mientras la visión de seguridad apunta a su exclusión social propias de políticas intimidatorias e inculcadoras o el aislamiento del condenado, qué contrarresta su reintegro a las dinámicas comunitarias.

En suma no es el camino interpretativo correcto asociar qué lazo la gravedad de la conducta es suficiente para negar el subrogado la libertad condicional. Eso sería tanto como asimilar la pena a un oprobioso castigo ofensa o expiación borrarla de un sentido de retaliación social qué encontraría el respeto por la dignidad humana cosifica al individuo que purga sus faltas y con desprecio anulan sus derechos fundamentales.

Lo anterior nos lleva aquel juez de ejecución de penas está en la obligación no solo de lo señalado en la parte motiva para la dosificación de la pena impuesta al condenado sino dilucidar las circunstancias que encierran esa conducta punible junto con la personalidad del infractor hasta ese momento como sociales personales laborales familiares y su adecuado comportamiento en el centro carcelario su conducta cursos alcanzados logros puntos que nos lleva a concluir si existe la necesidad de otorgar o no el subrogado invocado por el contrario requiere de mayor tratamiento penitenciario.

Del mismo modo dicha valoración no se puede hacer con base en criterios morales para determinar la gravedad del delito pues explicación de las distintas pautas que informan las decisiones de los jueces no puede hallarse en las diferentes visiones de los valores morales y no en los principios constitucionales.

El juez que vigila de valorarte igual manera dentro de la punibilidad lo tenido en cuenta por el fallador, así como las circunstancias de mayor y menor punibilidad los agravantes y los atenuantes en efecto se debe ajustar con el comportamiento al procesado en el centro carcelario con elementos útiles que permiten analizar si El condenado debe continuar cumpliendo la pena intramural o domiciliaria mente y su participación en las diferentes actividades que tiene instituidas el Inpec como punto fundamental para su resocialización entonces no se debe tener en cuenta únicamente el bien jurídico afectado como única motivación para negar el subrogado invocado se debe hacer un análisis completo una carga motivacional que garantiza la igualdad y la seguridad jurídica pues supone la evaluación de cada situación en detalle y justifica en cada caso el tratamiento diferenciado al que puede llegar el juez de ejecución de penas para cada condenado.

No obstante conforme a la jurisprudencia que trata sobre la resocialización y la ponderación que se debe evaluar al momento de la estudia la libertad condicional en la valoración de la conducta se debe tener en cuenta no solo la manera del ilícito y el tipo penal el cual ya fue evaluado por el fallador sino el progreso que ha obtenido el infractor al estar cumpliendo la pena de prisión impuesta.

Se tiene bien conocido que el estado tienen los deberes constitucionales que le corresponde a través de los distintos poderes que lo conforman (ejecutivo legislativo y jurisdiccional), diseñar la política criminal es una especial al legislativo Congreso de la República que según lo señala el artículo 150 de la Constitución Nacional le corresponde hacer las leyes.

La Política Criminal se entiende cómo el andamiaje o conjunto de herramientas necesarias para mantener el orden social y hacerles frente a las conductas que atenten de forma grave contra el

mismo y así proteger los derechos de los residentes en el territorio nacional y puntualmente a las víctimas de los delitos en efecto esta política criminal está enfocada a satisfacer entre otros asuntos el en el restablecimiento de las víctimas logrando la resocialización del autor o participe de la conducta penal.

Lo anterior significa que la Política Criminal del estado es el de proteger brindar asegurar resguardar a la sociedad optando que las medidas decisiones y disposiciones guarden armonía con los principios en que se funda sobre todo en las garantías que reconoce para los ciudadanos.

El artículo 4° de la ley 599 de 2000 indica que la pena cumplirá las funciones de prevención general retribución justa prevención especial reinserción social y protección al condenado del mismo modo resulta que la prevención especial y la reinserción social operen en el momento de la ejecución de la pena de prisión ellos significa que estos buscan la resocialización del condenado.

El artículo uno de la misma obra y en la Constitución nacional señala que el derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana en efecto para un estado social y democrático sea la necesidad de prevenir el delito con el fin de asegurar la protección de sus habitantes defenderlos de aquellos que infrinjan las normas contenidas en las leyes sin embargo ello no obsta que ese derecho penal se debe encauzar en respetar la dignidad del infractor como el de no imponer penas, penas de muerte o cadena perpetua dándole la oportunidad a cada individuo de tener la capacidad para arrepentirse enmendar sus errores resocializarse y volver a contribuir a la sociedad.

Ahora aquellas personas que por el andar de la vida comete un error que los lleva a pagar una pena principal de prisión el estado prevé un tratamiento penitenciario cuya finalidad es la reforma y la readaptación del penado a la sociedad el de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal mediante un examen de personalidad que se logra a través de la disciplina el trabajo el estudio la formación espiritual la cultura el deporte y la recreación bajo un espíritu humano y solidario.

El principal objetivo es de preparar al condenado mediante su resocialización para la vida en libertad debe realizarse conforme a la dignidad humana anteriormente mencionada Y a las necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto verificando la a través de los sistemas educativos y culturales de los establecimientos penitenciarios.

Se concluye que el tratamiento penitenciario es el conjunto de mecanismos de construcción grupal e individual tendientes a influir en la condición de las personas mediante el aprovechamiento del tiempo de condena como oportunidades para que puedan construir y llevar a cabo su propio proyecto de vida de manera tal que logren competencias para integrarse a la comunidad como seres creativos productivos autogestionarios una vez recuperen su libertad.

Sobre la resocialización la Honorable Corte constitucional señaló:

“durante la ejecución de las penas debe predominar la búsqueda de la resocialización del delincuente ya que esto es una consecuencia natural de la definición en Colombia como un Estado Social de derecho fundado en La romana el objeto del derecho penal en un estado como el colombiano no es excluir al delincuente del pacto social sino buscar su reinserción en el mismo y diferentes instrumentos internacionales de Derechos humanos establecen la función socializadora del tratamiento penitenciario de tal forma que la pena de prisión o intramural no puede ser considerada como la única forma de ejecutar la sanción impuesta al condenado”

Y en sentencia C-294-21 conceptuó:

“la resocialización puede ser entendida como un conjunto de medidas actividades up técnicas del tratamiento social o clínico que pretenden cambiar la conducta del interno volver a socializar se lo que significa aprender las expectativas sociales e interiorizar normas de conducta resocializarse es volver a valer como ser social conforme quiere la sociedad esto implica el reconocimiento la técnica que se maneja es el cambio de actitud y de valores se confunde con el cambio del delincuente en un buen interno”

En sentencia C-718-15, sobre la finalidad de la pena indicó:

“.. así en el ordenamiento penal deben reflejarse los anteriores finalidades de la pena no solo en el momento judicial de su determinación impidiendo su imposición o cumplimiento cuando no resulte necesaria para la protección de la sociedad o contraindicada para la resocialización del condenado sino también en el momento de su ejecución.

Al respecto a la finalidad de la pena ha señalado está Corte que ya tiene el nuestro sistema jurídico un fin preventivo que se cumple básicamente en el momento del establecimiento legislativo de la sanción la cual se presenta como la amenaza de un mal ante la violación de las prohibiciones un fin retributivo que se manifiesta en el momento de la imposición judicial de la pena y un fin resocializador que orienta la ejecución de la misma de conformidad con los principios humanistas y las normas de derecho internacional adoptadas ha considerado también que solo son compatibles con los Derechos humanos penas que tienen a la resocialización del condenado esto es a su incorporación a la sociedad como un sujeto de la engrandece con lo cual además se contribuye a la prevención general y a la seguridad de la coexistencia todo lo cual excluye la posibilidad de imponer la pena capital.

El conclusión debe entenderse que la pena debe entre sus varias finalidades cumplir una función de prevención especial positiva esto es debe buscar la resocialización del condenado obviamente dentro del respeto de su autonomía y dignidad pues el objeto del derecho penal en un Estado Social de derecho no es excluir al infractor del pacto social sino buscar su reintegración reinserción en el mismo.

El postulado de la prevención encuentra cabal desarrollo en el mismo estatuto penal cuando señala los criterios que debe tener el juez para aplicar la pena cómo son la gravedad y la modalidad del hecho punible el grado de culpabilidad las circunstancias de atenuación o agravación y la personalidad de la gente pero particularmente la función preventiva especial de la pena se proyecta en los denominados mecanismos sustitutivos de la pena que tal como lo hacen al lado la jurisprudencia constitucional puede ser establecidos por el legislador en ejercicio de su facultad de configurar siempre y cuando estén orientados hacia la efectiva resocialización de quienes hayan cometido hechos punibles favorezcan el desistimiento de la criminalidad y la reinserción de sus artífices a la vida en sociedad.

Se suma lo indicado en los artículos 94 96 y 97 de la ley 65 de 1993 que estipulan sobre la educación como la base fundamental de la resocialización y estatuyen que previa evaluación de los estudios realizados y lugar a que sea certificada por la autoridad designada para el efecto disponiendo que será concedido por el juez vigilante abonando un día de reclusión por dos días de estudio.

En igual sentido lo señalan los artículos 79 y 80 de la misma hora que indica sobre el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas que los establecimientos de reclusión son un medio terapéutico adecuado a los fines de resocialización.

Sobre la rotación de los peinados la sentencia T 061 de 2009, expreso que las personas que ingresan a un centro carcelario autores de un delito encuentran la oportunidad bien sea trabajando o estudiando de redimir pena que les fue impuesta dentro de sus funciones las cárceles encargan de resocializar el individuo con el fin de obtener la paz Es decir permitiendo que el preso puede rehabilitarse por medio del ejercicio de una actividad económicamente productiva impidiendo de esta manera que el infractor de la ley pueda incurrir en nuevos hechos punibles.

Sobre ese tema la corte en sentencia T 213 de 2011 reitero lo afirmado en La providencia t 718 de 1999 sobre la cual la pena no tiene un sentido de retaliación social o de venganza ni puede ser aplicado con saña ni con desprecio hacia ser humano que purga sus faltas anteriores ya tiene un carácter resocializador que debe aplicarse de modo civilizado conforme al derecho sin que el estado que tiene la función de administrar justicia abuse de sus atribuciones se iguale al delincuente.

Y en un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema justicia indicó lo siguiente:

Por lo anterior examinado el plenario Es evidente que las autoridades accionadas incurrieron en falencias al motivar sus decisiones pues el fundamento de la negativa a conceder la libertad condicional petitionada fue simplemente la valoración de la gravedad de la conducta sopesar los efectos de la pena hasta ese momento descontada el comportamiento del condenado y en general los aspectos relevantes para establecer la función resocializadora del tratamiento penitenciario lo que contraviene lo establecido en el artículo 64 del Código Penal y el desarrollo que de esa norma han realizado la Corte Constitucional y esta Corporación. Visto lo anterior que lo referente decantado en la jurisprudencia mencionada se tiene que la fecha la condenada de la pena principal de 110 meses impuesta a cumplido 87meses 21 días físicos, y redención superiores al porcentaje exigido por la norma del mismo modo vemos en la cartilla biográfica no registra sanciones ni transgresiones ni intentos de fuga y ahí que su rol ha sido óptimo para el sentido de su y resocialización sobre todo en el comportamiento la cárcel.

Entonces al purgar un total de pena física más las redenciones reconocidas que se totaliza en 110 meses no se arroja que ha cumplido con ello el 80% de la pena pues de tallase desde el momento que ha cumplido con sus funciones de resocialización los cuales le han otorgado menciones de honor dentro de sus estudios y sus cursos avanzados en talleres de modistería confecciones y tejidos y telares los cuales aprendido hacer trabajos en lana y que le han permitido ayudar a su hijas menor estando cerca de su arraigo familiar y entorno social.

Aunado a ello la conducta era de la condenada ha sido buena y ejemplar y sobre ese aspecto a pesar de que nunca la cacharon por su disciplina se trae un pronunciamiento sobre ese aspecto calificación de la conducta de la Corte Suprema de Justicia;

“.. las anteriores reflexiones sirven para deducir que la valoración de la buena conducta del condenado en el establecimiento penitenciario no puede depender de un solo lapso de una sola calificación sino que debe realizarse en cada caso concreto de manera ponderada principio rector artículo 27 ley 906 de 2004 y en forma integral con análisis de la evolución del comportamiento de

la persona durante todo el tiempo de reclusión con el fin de conocer si ha avanzado o retrocedido en su proceso de resocialización y Por tanto se merece ser motivado o incentivado el beneficio.

Dentro de las fases para el tratamiento penitenciario artículo 144 de la ley 65 de 1993 qué nos señala la norma se tiene que ha cumplido con la clasificación que se establece pasando como primera medida por la fase observación y diagnóstico a fase alta seguridad qué es un período cerrado en el que el interno accede al sistema de oportunidades en programas educativos y laborales en periodos cerrado permitiendo el plan de tratamiento orientado a la reflexión y fortalecimiento de sus habilidades destrezas y capacidades.

La fase mediana seguridad en la que se accede de parte del interno a los programas educativos y laborales en un espacio semiabierto comedia de seguridad menos restrictivas además los programas educativos y laborales ofrecidos en esta fase se basa en la intervención individual y grupal permitiendo la competencia psicosociales y ocupacionales a través de la educación formal no formal e informal vinculándolos en actividades industriales artesanales y agrícolas etcétera luego sigue la fase mínima en la que el interno se le orienta al fortalecimiento de su ámbito personal de reestructuración de la dinámica familiar y laboral.

Pues la sentenciada desde que se encuentra purgando pena desde 2 de abril de 2019 según lo anotado por las directivas en la cartilla biográfica no le figura sanciones disciplinarias intentos de fuga y tampoco en el tiempo que lleva en prisión en efecto las directivas con base a ese estudio expiró en la respectiva resolución favorable para la libertad condicional.

Para su señoría el tratamiento progresivo que ha recibido Blanca Edilma Correa Giraldo Giraldo durante la permanencia permite vislumbrar que su readaptación a tenido frutos demostrando excelente conducta dentro del centro carcelario y ha tenido un excelente desempeño permitiendo inferir qué a logrado su resocialización además ha tomado conciencia del error cometido y el estado le puede brindar esa oportunidad de incorporarse de mano de su familia con el fin de no colocar en peligro a la comunidad sino al contrario sería útil en las labores a las que se vaya dicar y en lo sucedido sea participe de la legalidad.

La valoración previa de la conducta punible es menester indicar que ella en esta fase ejecución de la pena el marca al ámbito de necesidad o no de la ejecución de la pena para así emitir un diagnóstico en el que protagonista será la sociedad comunidad quién debe soportar el riesgo.

“en este punto la Corte considera necesario precisar que en efecto el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad ejerce una función valorativa que resulta determinante para el acto de la concesión del subrogado penal para la Corte la función que ejerce los jueces de ejecución no es mecánica ni sujeta a parámetros matemáticos. Está involucra la potestad de levantar un juicio sobre la procedencia de la libertad condicional que ciertamente exige la aplicación del criterio El funcionario Judicial sin embargo no Por ello puede afirmarse que dicha valoración recae sobre los mismos elementos que se ven involucrados en el juicio penal propiamente dicho. Tal cómo quedó expuesto, la valoración en la etapa posterior a la condena se somete enteramente a los parámetros de la providencia condenatoria y tiene en cuenta elementos distintos cómo son el comportamiento del reo en prisión y la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario tal valoración no vuelve a poner entredicho la responsabilidad penal sino la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario y la prueba está como lo dice la Corte Suprema de Justicia en que la decisión judicial

se deniega el subrogado penal no aumenten y reduce el quantum de la pena sino que se limita a señalar que la misma debe cumplirse en su totalidad.

En síntesis, la Corte considera que la providencia por la cual se niega o se concede el beneficio la libertad condicional i) debe estar suficientemente motivada ii) los motivos aducidos deben haberse demostrado III) y la motivación justificada de la decisión debe cumplir con el requisito de razonabilidad el cual se verificara de acuerdo con las condiciones de reclusión del condenado. Sentencia C -194 de 2005 M.P Marco Gerardo Monroy Cabra.

Por su parte, la corte constitucional en sentencia C 757 de 2014 M.P Gloria Stella Ortiz Delgado, frente al análisis que debe efectuar el juez de ejecución de penas de la gravedad de la conducta indicó:

“En segundo lugar, el texto anterior contenía la expresión “de la gravedad”, la cuál circunscribía el análisis que debía realizar los jueces de ejecución de penas a una valoración de la gravedad de la conducta punible. En las sentencias 694 2005 la corte declaró la exequibilidad condicionada de dicha expresión. Esta Corporación se terminó qué El deber de realizar este análisis se ajusta a la constitución en el entendimiento de que dicha valoración deberá atenerse a los términos en que fue evaluada la “gravedad de la conducta” en la sentencia condenatoria por parte del juez de la causa entre tanto en el tránsito legislativo el Congreso no solo no concluyó el condicionamiento de hecho por la corte de la sentencia C 194 de 2005 en el nuevo texto sino que adicionalmente exclusión la expresión “de la gravedad”. Por lo tanto resulta razonable interpretar la nueva reacción como una ampliación del ámbito de la valoración que le corresponde llevar a cabo al juez de ejecución de penas según dice interpretación ya no le correspondería a este solo valorar la gravedad de la conducta punible si no quiere concerniría para lograr todos los demás elementos aspectos y dimensiones de dicha conducta.

No existe duda qué las sentencias hacia parte de una organización criminal encargada de ejecutar actividades dedicadas al tráfico estupefacentes como actividades principal hecho merecedor de censura y una estricta posición de la judicatura encaminada a la protección de la comunidad y pues es ella la más afectada en especial y por desgracia la juventud que tentar por el consumo de inicio en un círculo infinito y vicioso del que es difícil de salir con las consecuencias que a diario se conocen como lo es la incursión a nuevas actividades punibles como forma de financiación.

No puedo olvidar sé que la estructura criminal además de contar con características propias de una verdadera empresa cómo son la estabilidad y la permanencia su principal era la comisión de delitos relacionados con el tráfico de estupefacentes generando un grave perjuicio para la sociedad en especial como síndico para la niñez y la juventud.

Sobre ese asunto en particular en sentencia T 334 2013 la Corte Constitucional

trabajo actualización el concepto de delincuencia organizada contemplado con la convención de las Naciones Unidas en dónde expuso: “por el contrario alineadas contra esas fuerzas constructivas cada vez en mayor número y con armas más potentes se encuentran fuerzas de lo que dominó la sociedad civil se trata de terroristas criminales traficantes de droga traficantes de personas y otros grupos que desbaratan las buenas obras de la sociedad civil sacan ventaja de las fronteras abiertas de los mercados libres y de los avances tecnológicos qué tantos beneficios acarrear a la humanidad esos grupos prosperan los países con intenciones débiles y no tienen escrúpulos en recurrir a la

intimidación cuál la violencia su crueldad es la verdadera antítesis de lo que consideramos civil son poderosos y representan intereses arraigados y el peso de una empresa mundial de miles y millones de dólares pero no son invisibles”

Obstante lo anterior el análisis de la gravedad de la conducta presupuesto a ser verificado en estudio es por ello que se toma en obligación que El funcionario ejecutor analiza la forma y condiciones del tratamiento penitenciario del priva la libertad que comporta la verificación en cada caso particular que el cabal cumplimiento de las funciones y fines de la pena durante la fase ejecución de acuerdo con lo preceptuado en los artículos noveno del Código Penitenciario y carcelario y cuarto de la ley 599 que prevén:

“Artículo noveno: la pena tiene función protectora y preventiva pero su fin fundamental es la resocialización las medidas de seguridad persiguen fines de curación tutela y rehabilitación.

“Artículo cuarto: la pena cumplirá las funciones de prevención general retribución justa prevención especial reinserción social y protección al condenado.

Prevención especial de reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión.

Ha de tenerse en cuenta además los fines del tratamiento penitenciario que alterno del artículo 10 del código penitenciario y carcelario se traducen la verdadera resocialización y reinserción social del sentenciado.

Tópico es necesario traer a colación la reciente decisión de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, AP2977-2022 del 12 de julio de 2022, MP Fernando León Bolaños Palacios, en cuyos apartes indico:

“Así las cosas puede afirmarse que la finalidad de la previsión contenida en el artículo 64 del Código Penal con sus respectivas modificaciones nos otra que relevar al condenado el cumplimiento de una porción de la pena que lo hubiere sido impuesta cuando el concreto examen del tiempo que ha permanecido privado de la libertad de sus características individuales y la comprobación objetiva de su comportamiento en prisión o en su residencia permiten concluir que en su caso resulten necesario continuar con la ejecución de la sanción.

Esta sala en la sentencia de tutela STP158062019, radicado 683606, se refiere a los fines que debe perseguir la pena de la siguiente manera:

La pena no ha sido pensaba únicamente para lograr y los últimos que la sociedad y la víctima castiguen al condenado y con ello vean sus derechos recibidos sino que responde la finalidad constitucional de la resocialización como garantía y la dignidad humana.

Así se tiene que: en la fase previa a la comisión del delito prima la intimidación de la norma es decir la motivación al ciudadano mediante La amenaza de la ley para que se abstenga desplegar conductas que pongan en riesgo tiene jurídicos protegidos por el derecho penal en la fase de imposición y medida judicial deben tenerse en cuenta la culpabilidad y los derechos del inculcado sin olvidar que sirve a la confirmación de la seriedad de La amenaza penal y a la intimidación individual y en la fase de ejecución de la pena esta vez guiarse por las ideas de resocialización y reinserción social.

Lo anterior está indicando que el solo análisis de la modalidad o gravedad de la conducta punible no puede tenerse como motivación suficiente para negar la colección del subrogado penal como pareció entenderlo el aquo asegurar que no puede pregonar la procedencia del beneficio denominado libertad condicional pues ese pronóstico sigue siendo desfavorable en atención a la valoración de la conducta circunstancia que no cambiará su comportamiento delictivo nació grave y no pierde sus características con ocasión del proceso de resocialización y rehabilitación dentro del tratamiento penitenciario.

Por el contrario sea entender qué tal examen TV afrontarse a cara a la necesidad de cumplir una sanción de impuesto por lo que no se trata de un mero y aislado examen de la gravedad de la conducta si no tengo un estudio de la personalidad tual ie los antecedentes de todo orden del sentenciado para de esta forma de evaluar su proceso de readaptación social por lo que en la apreciación de esos factores debe conjugarse el impacto social que genera la comisión del delito bajo la elegida de los fines de la pena los cuales para estos efectos son complementarios no excluyentes.

El mismo sentido está la providencia AP3348/2022 del 27 de julio de 2022 M.P Fabio Ospitia Garzón, Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de la cual surge pertinente extraer los siguientes argumentos en lo que toca en el caso sub judice:

“El análisis que adelante el juez de ejecución de penas a la hora resolver una solicitud de libertad condicional apunta a una finalidad específica: establecer la necesidad de continuar el tratamiento penitenciario a partir del comportamiento carcelario y condenado.

La corte reiterar que cuando legislador penal de 2014 modificó la exigencia de valoración de la gravedad de la conducta punible por la valoración de la conducta acentuó el fin resocializador de la pena qué necesi apunta a que el reo tenga la posibilidad cierta recuperar su libertad y reintegrarse el tejido social antes del cumplimiento total de la sanción.

En suma no es el camino interpretativo correcto asociar que lazo la gravedad de la conducta es suficiente para negar el subrogada la libertad condicional ello sería tanto como asimilar la pena de un oprobioso castigo, ofensa o expiación o dotarla en un sentido de retaliación social que en contravía de respecto por la dignidad humana cosifica el individuo que purga sus faltas y con desprecio anula sus derechos fundamentales.

Bajo tales presupuestos se colige sin hesitación alguna, qué al momento de realizar el sustituto la libertad condicional debe tenerse en cuenta las condiciones y circunstancias que han rodeado el tratamiento penitenciario del reo para establecerse alcanzado el fin resocializador que lleva implícita la pena para determinar si está o no preparado para la vida en libertad sienta respetuoso de las normas que rigen la convivencia y el orden social.

La pena tiene una finalidad constitucional relevante en materia de resocialización del condenado por lo que el sistema carcelario y penitenciario tiene la obligación de alcanzar este objetivo por su parte los sustitutos y subrogados penales son beneficios que aportan el proceso de resocialización del interno pues le permite la aplicación de penas alternativas o sustitutivas a la prisión y además humaniza en el proceso de ejecución de la pena.

Del arraigo familiar oncológicamente el arraigo familiar y social en materia penal se ha determinado como requisito para establecer certeza de la comparecencia del investigado a las diferentes etapas del proceso que en caso de ser convocado y este no acuda se contara con la información que puede ayudar a su ubicación en aquellos casos donde sea procedente al otorgamiento de la libertad provisional.

Mismo caso ocurre con el instituto el sustituto de la prisión intramural por domiciliaria libertad condicional donde el arraigo familiar y social juega un papel fundamental mente para que el operador judicial en conjunto con las diferentes entidades como el instituto Nacional penitenciario inpec ejercen un control material cumplimiento de la condena.

El arraigo familiar debe entenderse como la coexistencia de personas que permanezcan al núcleo familiar del procesado condenado de este pero no necesariamente dicho núcleo deben revestir especiales condiciones simplemente existir el sentenciado qua habita con individuos que pertenezcan a su familia, sin distinción de líneas o grados de sangre.

Qué otra parte el arraigo social debe entenderse como un conjunto de esas condiciones en que un individuo acentuado su vida en relación a un lugar específico desarrollando sus actividades diarias como trabajo estudio viviendo a simplemente la relación con un grupo determinado en síntesis el arraigo está cimentado en la correlación de una persona con otros integrantes de una comunidad que comparte un espacio específico. Concluyendo con esto que la señora Correa Giraldo vivir al lado de sus hijos.

En virtud de criterio jurisprudencial transcrito entonces de conformidad con los certificados de calificación de conducta la sentencia de la cartilla biográfica llegada por el centro carcelario dónde se encuentra reclusa ahora esta cárcel con su comportamiento desde su ingreso al penal por puente de la presente actuación ha sido calificada en grados bueno y ejemplar asimismo se resulta que durante el tiempo reclusión la pre nombrada interna a cumplir días laborales que le han merecido reconocimiento de redención de pena además en privación de la libertad intramuros Correa Giraldo no ha sido sancionaría disciplinariamente y al contrario ha recibido reconocimientos de mención de honor por sus logros en educativa.

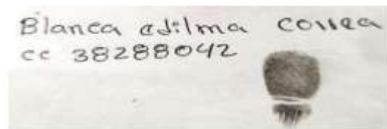
Razones estás qué permiten acreditar que la señora Correa Giraldo se encuentra cumpliendo de manera efectiva la sanción impuesta presenta un adecuado proceso de resocialización Y por consiguiente inferir que se encuentra en condiciones de adaptarse nuevamente a la vida en comunidad y no reincidir en conductas ilícitas que pongan en riesgo el conglomerado inferencia que se soporta almacén la carencia antecedentes penales y él hecho de no obrar reporte de novedad en el cumplimiento de la pena qué se traduce en la confianza del estado en otorgar la libertad anticipada para apoyar su proceso de resocialización y reinserción.

En consecuencia de la anterior análisis ha cumplido el propósito resocializador de la pena si acepta y fecha y que el estado debe velar para que la ciudadana Correa Giraldo puede adaptarse de nuevo y en legalidad al núcleo social porque ya conoce las consecuencias de actuar contrario al derecho y en sus términos al no estimarse necesario la culminación del cumplimiento de la pena privada de la libertad sumado a que congenian los requisitos establecidos en el artículo 64 sustancial penal se solicita su señoría revocar la decisión de primera instancia y en su lugar se concede la libertad

condicional en favor de la señora Blanca Edilma Correa Giraldo o en su defecto reconocer el recurso de apelación ante el juzgado fallado

De igual sin dejar efecto elevó mis más grandes excusas por tal motivo Pido a Dios, a su señoría, a mi familia pido perdón se que con el perdón no borro los malos actos causados por los malas amistades pero si le pido una oportunidad de demostrarle que he cambiado.

Cordialmente



Blanca edilma correa
cc 38288042

BLANCA EDILMA CORREA GIRALDO
CC. 38.288.042
TD 73791
NUI 923462
Pabellón 6

Señores

**JUZGADO 18 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD DE BOGOTA**

Ciudad Bogotá D.C

E

S.

D.

REF: PROCESO No. RAD. 11001600000020160023100

**PROCESADO: BLANCA EDILMA CORREA GIRALDO C.C. No.
38.288.042**

**ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN Y/O EN SUBSIDIO DE
APELACIÓN EN CONTRA DEL AUTO FECHADO DEL 26 DE JULIO
DE 2023 QUE NEGÓ LA LIBERTAD CONDICIONAL A BLANCA
EDILMA CORREA GIRALDO**

EDISSON H. PRIETO VILLAREAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.895.229 de Bogotá y portador de la Tarjeta Profesional No. 373.618 del C. S. de la J, manifiesto ser apoderado de la señora **BLANCA EDILMA CORREA GIRALDO**, mayor de edad, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 38.288.042, respectivamente, reclusa en centro de reclusión de mujeres el buen pastor de Bogotá, en calidad de condenada dentro del proceso de la referencia, me permito **INTERPONER RECURSO DE REPOSICIÓN Y/O EN SUBSIDIO DE APELACIÓN EN CONTRA DEL AUTO FECHADO DEL 26 DE JULIO DE 2023 QUE NEGÓ LA LIBERTAD CONDICIONAL A BLANCA EDILMA CORREA GIRALDO**, por lo que permito presentar los siguientes:

ARGUMENTOS

Revisando en detalle la decisión objeto del presente recurso, esta defensa encuentra varias inconsistencias que el Juzgado no tuvo en cuenta en el escrito de solicitud de libertad condicional, entre las cuales las sentencias de tutela en

el que se estipulo precedente constitucional sobre la valoración de la conducta punible.

Esta defensa procede a argumentar las razones fácticas y jurídicas, sobre las cuales se debe reponer la decisión del auto del 26 de JULIO de 2023 objeto del presente recurso de acuerdo con:

PRIMERO: El Juzgado no tuvo las directrices de la Corte Constitucional fijadas en Sentencia T- 640 de 217, por tal motivo esta defensa repite el ejercicio a realizar por parte del Despacho judicial que debió hacerse:

VALORACIÓN DE LA CONDUCTA PUNIBLE:

El legislador no fijó los parámetros para que los jueces ejecutores valoraran la conducta punible como requisito para conceder el subrogado penal de libertad condicional, en cumplimiento a los señalamientos del artículo 30 de la ley 1709 de 2014. Es así como la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-640 de 2017, fijar los parámetros constitucionales como lo mencionare a continuación:

“Advirtió el Alto Tribunal de Justicia Ordinaria (sic) que para realizar dicho ejercicio de ponderación se debe acudir a los parámetros instituidas (sic) por el Legislador, la primera, contenida en el artículo 64, “regla general”, que permite al condenado, con el cumplimiento de ciertos requisitos, acceder a la libertad condicional y la segunda, “regla de excepciones”, en virtud de la cual se excluyó, en casos concretos, el mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad.

De lo anterior se concluye que, para pronunciarse sobre la viabilidad de la libertad condicional, en punto del aspecto subjetivo, esto es, la gravedad de la conducta punible impone: de un lado, revisar si la conducta fue considerada como especialmente grave por el Legislador en el artículo 68A del Código Penal y en

los artículos 26 de la Ley 1121 de 2006 y 199 de la 1098 de 2006. Si aplicado ese filtro de gravedad, resulta jurídicamente posible conceder el subrogado, el juez debe verificar, tanto el cumplimiento de los requisitos objetivos exigidos por la norma [...], como el cumplimiento de los requisitos subjetivos que se derivan de la valoración de las condiciones particulares del condenado.”

Es así, que la jurisprudencia Constitucional ha aceptado como razonable y ajustado al ordenamiento jurídico, que los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad apliquen, en primer lugar, las pautas de excepciones de cara a la gravedad de la conducta, para luego, proceder a analizar la aplicación del patrón general. En este segundo momento del análisis los jueces deben tener en cuenta la gravedad de la conducta, tal y como fue valorada en la sentencia condenatoria y bajo tal ponderación no hay vulneración alguna en que ese elemento subjetivo se convierta en el aspecto central para negar la solicitud.” (sentencia T-640 de 2017).

Obedeciendo lo anterior el delito por el que fue condenado mi poderdante:
TRAFICO ESTUPEFACIENTES Y CONCIERTO PARA DELINQUIR.

Por tal motivo me permito señalar las leyes mencionadas para determinar si los delitos por los que fue condenada mi poderdante, se encuentran allí:

“LEY 1121 DE 2006, Artículo 26. *Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los*

beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz.”.

“LEY 1098 DE 2006, Artículo 199. Beneficios y mecanismos sustitutivos. Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas: (...)

“LEY 1709 DE 2014, Artículo 32. Modifícase el artículo [68A](#) de la Ley 599 de 2000 el cual quedará así:

Artículo 68A. Exclusión de los beneficios y subrogados penales. No se concederán; la suspensión condicional de la ejecución de la pena; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores.

Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; **concierto para delinquir agravado**; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; extorsión, lesiones personales con deformidad causadas con elemento corrosivo; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los

*contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con **el tráfico de estupefacientes** y otras infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonal.*

Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales [2](#), [3](#), [4](#) y [5](#) del artículo 314 de la Ley 906 de 2004.

Parágrafo 1°. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a la libertad condicional contemplada en el artículo 64 de este Código, ni tampoco para lo dispuesto en el artículo 38G del presente Código.

Lo anterior indica que los delitos por lo que fue condenada mi representada no se encuentra señalado o excluido de la ley 1121 de 2006, ley 1098 de 2006, pero si en el artículo 68A del código penal, lo que indica que el Juez debe remitirse al parágrafo subrayado.

En ese orden de ideas el Juez executor no le queda sino sopesar los efectos de la pena hasta el momento de estudiar la solicitud de libertad condicional, con miras hacia el futuro, como quiera que sea el comportamiento actual que determina el balance positivo de presentar una persona nueva a la sociedad, en aras de no poner en peligro a la misma.

NOVEDAD: EL Juzgado paso por alto las directrices establecidas por la Honorable corte constitucional, y que no fue objeto de estudio en la decisión incurriendo así en un defecto procedimental, en aplicación de la jurisprudencia en los casos en los que recae el estudio de concesión del subrogado penal de

libertad condicional, el cual debe realizarse el ejercicio antes mencionado, queda entonces revisar en detalle el proceso de resocialización de **BLANCA EDILMA CORREA GIRALDO**, y lo que implica analizar su conducta actual respecto a la prevención especial positiva, que no es más que si el comportamiento actual demuestra que el proceso de resocialización de mi poderdante es positivo, indica que no pondría en peligro a la comunidad, toda vez que esto ya fue objeto de estudio por parte de los profesionales idóneos del INPEC (consejo de evaluación y tratamiento), que emitieron resolución favorable al caso que nos asiste a favor de mi poderdante.

SEGUNDO: El despacho no atendió a las directrices de la Corte Suprema de Justicia en fallo de impugnación de tutela Rad. 1376 acta No. 144 de fecha del 04 de julio de 2020, **MP. Dr. EUGENIO FERNANDEZ CARLIER:**

“Posteriormente, en sentencias C-233 de 2016, T-640/2017 y T-265/2017, el Tribunal constitucional determino que, para facilitar la labor de los jueces de ejecución de penas ante tan ambiguo panorama, estos deben tener en cuenta, siempre, que la pena no ha sido pensada únicamente para lograr que la sociedad y la víctima castiguen al condenado y que ello vean sus derechos restituidos, sino que responde a la finalidad constitucional de la resocialización como garantía de la dignidad humana.

6. Bajo este respecto, esta corporación ha considerado que no es procedente analizar la concesión de la libertad condicional a partir solo de la valoración de la conducta punible, en tanto la fase de ejecución de la pena debe ser examinadas por los jueces ejecutores, en atención a que ese periodo debe guiarse por las ideas de resocialización y reinserción social, lo que de contera debe ser analizado. Así se indicó:

No puede tenerse como razón suficiente para negar la libertad condicional la alusión a la lesividad de la conducta punible frente a los

bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal, pues ello solo es compatible con prohibiciones expresas frente a ciertos delitos, como sucede con el artículo 68 A del Código Penal.

En este sentido, la valoración no puede hacerse, tampoco, con base en criterios morales para determinar la gravedad del delito, pues la explicación de las distintas pautas que informan las decisiones de los jueces no puede hallarse en las diferentes visiones de los valores morales, sino en los principios constitucionales;

ii) La alusión al bien jurídico afectado es solo una de las facetas de la conducta punible, como también lo son las circunstancias de mayor y de menor punibilidad, los agravantes y los atenuantes, entre otras. Por lo que el juez de ejecución de penas debe valorar, por igual, todas y cada una de éstas;

iii) Contemplada la conducta punible en su integridad, según lo declarado por el juez que profiere la sentencia condenatoria, éste es solo uno de los distintos factores que debe tener en cuenta el juez de ejecución de penas para decidir sobre la libertad condicional, pues este dato debe armonizarse con el comportamiento del procesado en prisión y los demás elementos útiles que permitan analizar la necesidad de continuar con la ejecución de la pena privativa de la libertad, como bien lo es, por ejemplo, la participación del condenado en las actividades programadas en la estrategia de readaptación social en el proceso de resocialización.

Por tanto, la sola alusión a una de las facetas de la conducta punible, esto es, en el caso concreto, solo al bien jurídico, no puede tenerse, bajo ninguna circunstancia, como motivación suficiente para negar la concesión del subrogado penal. Esto, por supuesto, no significa que el juez de ejecución de penas no pueda referirse a la lesividad de la conducta punible para valorarla, sino que no puede quedarse allí. Debe, por el contrario, realizar el análisis completo.

iv) El cumplimiento de esta carga motivacional también es importante para garantizar la igualdad y la seguridad jurídica, pues supone la evaluación de cada situación en detalle y justifica, en cada caso, el tratamiento diferenciado al que pueda llegar el juez de ejecución de penas para cada condenado.

7. Por lo anterior y examinado el plenario, es evidente que las autoridades accionadas incurrieron en falencias al motivar sus decisiones, pues el fundamento de la negativa a conceder la libertad condicional petitionada fue simplemente la valoración de la gravedad de la conducta, sin sopesar los efectos de la pena hasta ese momento descontada, el comportamiento del condenado y, en general, los aspectos relevantes para establecer la función resocializadora del tratamiento penitenciario; lo que contraviene lo establecido en el artículo 64 del Código Penal y el desarrollo que de esa norma han realizado la Corte Constitucional y esta Corporación.

Por lo anterior, al desconocer el precedente jurisprudencial, los demandados, incurrieron en un desconocimiento del precedente judicial de las Altas Cortes y, por consiguiente, en un defecto sustantivo, pues las decisiones dejaron de evaluar la necesidad de continuar con la ejecución de la pena en el establecimiento penitenciario y carcelario.”

Preocupa a esta defensa que el Juzgado no haya tenido en cuenta los precedentes constitucionales de las altas cortes, a pesar de que en su decisión, nombre algunas sentencias en el acápite de *precedente jurisprudencial*, pero en el resuelve o estructura de su decisión que negó el subrogado penal de libertad condicional a mi poderdante, no se evidencia en detalle que haya procedido a recoger lo esencial para el estudio que nos aqueja con el presente recurso, ni tan si quiera tuvo en cuenta que mi representada ha venido cumpliendo con su proceso resocialización, y que se encuentra en **FASE DE MINIMA SEGURIDAD**.

Encuentra entonces que este Juzgado al no sopesar en detalle el proceso de resocialización de **BLANCA EDILMA CORREA GIRALDO** incurre en una violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación de la jurisprudencia constitucional referente a la libertad condicional en su integralidad.

La Corte ha dicho:

7. Por lo anterior y examinado el plenario, es evidente que las autoridades accionadas incurrieron en falencias al motivar sus decisiones, pues el fundamento de la negativa a conceder la libertad condicional peticionada fue simplemente la valoración de la gravedad de la conducta, sin sopesar los efectos de la pena hasta ese momento descontada, el comportamiento del condenado y, en general, los aspectos relevantes para establecer la función resocializadora del tratamiento penitenciario; lo que contraviene lo establecido en el artículo 64 del Código Penal y el desarrollo que de esa norma han realizado la Corte Constitucional y esta Corporación.

El Juzgado solo se limitó a referirse en tan solo dos párrafos sobre el comportamiento de mi poderdante al interior del centro de reclusión, sin revisar el tratamiento penitenciario en sus fases y progreso diario de **BLANCA EDILMA CORREA GIRALDO**. No reviso los aspectos relevantes para establecer la función resocializadora, y desestimo la resolución favorable que emitió el INPEC a través de sus profesionales idóneos para demostrar que mi defendida ha cumplido el tratamiento penitenciario suficiente para disfrutar de la libertad condicional.

Si la resocialización del condenado es indicativa de la función de la pena que busca la reinserción social del condenado, podríamos decir que, en un Estado social de derecho, fundado en la dignidad humana, la concesión de los subrogados penales, guardan íntima relación con la realización de las garantías mínimas establecidas en el catálogo normativo superior y, puntualmente, en la resocialización del infractor como fin esencial de la sanción penal.

Al estudio que debió hacerse por parte del Juzgado ejecutor, debe analizar aspectos tales como:

1. Resolución favorable: según la ley 65 de 1933 en su artículo 145 reza:

“Artículo 145. Consejo de Evaluación y Tratamiento. En cada establecimiento penitenciario habrá un Centro de Evaluación y Tratamiento. El tratamiento del sistema progresivo será realizado por medio de grupos interdisciplinarios, de acuerdo con las necesidades propias del tratamiento penitenciario. Estos serán integrados por abogados, psiquiatras, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, médicos, terapeutas, antropólogos, sociólogos, criminólogos, penitenciaristas y miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia.”

Es así, y debate esta defensa que no puede realizarse un estudio de fondo respecto al proceso de resocialización de un condenado, en tan solo dos párrafos, son tan siquiera revisar en detalle la cartilla biográfica y lo que han dicho el grupo de profesionales que conforman el Consejo de Evaluación y Tratamiento sobre **BLANCA EDILMA CORREA GIRALDO**. Incurre así el Juzgado en la no apreciación y valoración de las pruebas aportadas por parte del INPEC y por parte de esta defensa. El solo hecho que mi representada se encuentre cumpliendo con su tratamiento penitenciario en el que se aproxima cada vez a ese reintegro a la social, en cumplimiento al fin resocializador.

En primer lugar al no darle el valor suficiente a la resolución favorable que determina que ha sido suficiente el tratamiento penitenciario de **BLANCA EDILMA CORREA GIRALDO** y que los profesionales tales como: *abogados, psiquiatras, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, médicos, terapeutas, antropólogos, sociólogos, criminólogos, penitenciaristas y miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia han dicho que están de acuerdo con que se le conceda el subrogado penal de libertad condicional, claro está que este beneficio está supeditado a un periodo de prueba.*

2. Programas de redención y de reinserción social:

El artículo 10 de la ley 65 de 1993 reza:

“ARTICULO 10. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO. *El tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario.”*

Así las cosas, es indispensable solicitar al señor Juez valore y aprecie todo el contenido del proceso de resocialización desde el momento que fue privada de su libertad, que dentro de ese tiempo no podemos estar hablando de la misma persona privada de la libertad, cuando existe un proceso de tratamiento penitenciario en curso, y juntamente un proceso familiar, que entraría a evaluar la conducta actual de mi poderdante, que de antemano manifiesto que ha sido ejemplar.

Cabe anotar que la Corte Constitucional Concluye en la sentencia C-757 de 2014:

*“51. Finalmente, la Corte concluye que los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad deben aplicar la constitucionalidad condicionada de la expresión “previa valoración de la conducta punible” contenida en el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, **en todos aquellos casos en que tal condicionamiento les sea más favorable a los condenados.**”*

Ese condicionamiento debe ser más favorable a los condenados. En el caso concreto es indispensable aplicar el precedente constitucional, ese aspecto, por que garantiza que no se desconozca el precedente constitucional citado en el presente recurso, y que fue citado en la solicitud de libertad condicional. La conducta punible hay que castigarla, claro está señor Juez, y las funciones de la pena, debe ir acompañada del estudio minucioso del proceso de resocialización del condenado.

En sentencia T-640 de 2017, la Honorable Corte Constitucional fijó los criterios constitucionales que debe seguir el Juez executor a la hora de valorar la conducta punible, el no hacerlo vulnera el derecho fundamental a la dignidad humana como pilar fundamental del proceso de resocialización de los condenados.

Por último la corte dijo al respecto sobre:

“El sistema penal consagra como funciones de la pena la prevención general, la retribución justa, la prevención especial, la reinserción social y la protección al condenado. No obstante, solo la prevención especial y la reinserción social son las principales funciones que cobran fuerza en el momento de la ejecución de la pena de prisión (art. 4 Código Penal), de tal forma que como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional desde sus inicios, en el Estado social de derecho la ejecución de la sanción penal está orientada hacia la prevención especial positiva, esto es, en esta fase se busca ante todo la resocialización del condenado respetando su autonomía y la dignidad humana como pilar fundamental del derecho penal. (subrayas fuera de texto).

Con lo anterior, queda más que demostrado que la valoración de la conducta punible está sujeta al comportamiento actual del condenado, sopesando así los efectos de la pena hasta ese momento, de acuerdo con el tratamiento penitenciario desarrollado en toda su estadía en el centro de reclusión que busca el proceso de resocialización en toda su plenitud, y valorar los dictámenes emitidos por el consejo de evaluación y tratamiento respecto a la libertad condicional de un condenado.

La Corte Constitucional así lo dijo en sentencia T-1190 de 2003:

“Desde el punto de vista constitucional, la relación de especial sujeción que surge entre el Estado y el recluso implica que las acciones del Estado estén dirigidas a facilitar las condiciones para una verdadera resocialización de las personas que han sido condenadas penalmente a

pena privativa de la libertad. Esta concepción humanista del sistema jurídico y del sistema penal, inspirada en el principio superior de la dignidad humana y sustento de una de las llamadas funciones de la pena, implica que las autoridades del Estado y en particular, las autoridades penitenciarias, estén en la obligación de desplegar una serie de conductas necesarias e idóneas para garantizar el mayor nivel de resocialización posible de los reclusos. En este sentido, las disposiciones de la ley 65 de 1993, en particular las que desarrollan el sistema progresivo penitenciario (arts., 142 y ss., de la referida ley) quedan revestidas de una legitimidad constitucional especial, pues de su eficacia particular depende también la de los principales mandatos constitucionales y su realización concreta en el caso de las personas privadas de la libertad.

(...)

El proceso de resocialización está edificado sobre un conjunto de factores que deben concurrir para garantizar las condiciones necesarias para su eficacia: (i) la oportunidad y disposición permanente de medios que garanticen la realización de diversas actividades de orden laboral, educativo, deportivo y lúdico; (ii) las condiciones cualificadas de reclusión, en aspectos básicos como el goce permanente de servicios públicos esenciales, buenas condiciones de alojamiento, alimentación balanceada, servicios sanitarios mínimos, etc. y (iii) el acompañamiento permanente durante el periodo en que se prolonga la privación de la libertad, con el auxilio de un equipo interdisciplinario de profesionales en ciencias sociales y de la salud, de la red de apoyo y de la familia del recluso.”

Concluimos así, que el INPEC al aportar los documentos de que trata el artículo 471 del CPP, señala si el tratamiento penitenciario ha sido eficaz en el condenado hasta el momento de cumplir las 3/5 partes de la condena, que permitirá a través del equipo interdisciplinario de profesionales en ciencias sociales y consejo de disciplina del INPEC, emitir una resolución favorable o

desfavorable, y así el Juez evaluara lo que las altas cortes han dicho sobre el proceso progresivo de resocialización.

De acuerdo con lo anterior, el INPEC ha dicho sobre mi poderdante que su proceso de resocialización es favorable y que se ajusta a la oportunidad de conceder el subrogado penal de libertad condicional.

Por lo anterior me permito elevar las siguientes:

PRETENSIONES

PRIMERO: Sírvase reponer el auto interlocutorio de fecha del 26 de julio de 2023 que negó el subrogado penal de libertad condicional, y en su lugar conceda el subrogado penal aquí solicitado a **BLANCA EDILMA CORREA GIRALDO**.

NOTIFICACIONES

Dirección: CARRERA 8 No. 12B – 83 OFICINA 401 de Bogotá.

Celular: 3178831734

Correo electrónico: villarreal.abogados23@gmail.com

Atentamente,



EDISSON H. PRIETO VILLAREAL

C.C. No. 80.895.229 expedida en Bogotá

T.P. No. 373.618 del C. S de la J.